

EL ESPEJISMO DE LA SOJA

Los límites de la responsabilidad social empresarial:
el caso de Desarrollo Agrícola del Paraguay

ARANTXA GUEREÑA

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

ARANTXA GUEREÑA Y QUINTÍN RIQUELME

El monocultivo de soja en Paraguay se ha expandido aceleradamente hasta ocupar el 80 por ciento de la superficie de cultivo, agravando la inequidad en el acceso a la tierra y desplazando la agricultura campesina e indígena. Dentro del sector, Desarrollo Agrícola del Paraguay ha buscado diferenciarse al contar con una política de responsabilidad social y ambiental e invertir en iniciativas comunitarias cuyos resultados se analizan en este informe. Sin embargo, los esfuerzos emprendidos por esta empresa están muy lejos de compensar los impactos negativos generados por un modelo de producción que profundiza la concentración de la riqueza y la tierra, contamina el medio ambiente, daña la salud de las personas, compete por recursos limitados y pone en riesgo los medios de vida tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas.

Los Informes de Investigación de Oxfam se elaboran para compartir los resultados de las investigaciones, contribuir al debate público y suscitar intercambios de ideas sobre políticas y prácticas humanitarias y de desarrollo. No reflejan necesariamente la postura política de Oxfam. Las opiniones expresadas son las de los autores y no necesariamente las de Oxfam.

CONTENIDO

Resumen ejecutivo.....	3
Introducción.....	5
Parte I: El contexto.....	7
Pobreza y desigualdad en Paraguay.....	7
El país con peor reparto de la tierra de América Latina.....	8
La soja: El mercado mundial de la soja.....	15
La soja en Paraguay.....	16
Parte II: El caso de Desarrollo Agrícola del Paraguay.....	26
Perfil de la empresa.....	26
El modelo de negocio de DAP.....	27
Estrategia con las comunidades: de la resistencia a la beneficencia.....	30
Proyectos productivos: crónica de un fracaso.....	31
Un costoso aprendizaje.....	37
Impactos de las operaciones de DAP.....	38
Conclusiones.....	42
Bibliografía.....	44
Siglas y acrónimos.....	47
Agradecimientos.....	48
Notas.....	49

RESUMEN EJECUTIVO

Pese a su pequeño tamaño, Paraguay es el sexto país productor y el cuarto exportador de soja del mundo. La soja está en la base de una economía que experimentó el mayor crecimiento de toda América Latina en 2010. Sin embargo esta riqueza no se distribuye, como demuestra el hecho de que una de cada tres personas en el medio rural viva bajo el umbral de la pobreza extrema.

La inequidad en el acceso a la tierra es uno de los principales factores que perpetúa la pobreza rural en Paraguay, el país con el reparto más inequitativo de toda América Latina. Mientras una élite de grandes latifundistas acapara el 80% de la superficie de uso agropecuario, miles de familias campesinas e indígenas carecen de tierra suficiente para subsistir y se ven forzadas a emigrar a las ciudades. Un problema que se ha agravado en los últimos años a causa de la expansión de los monocultivos, encabezados por la soja.

Esta falta de acceso a la tierra da lugar a numerosos conflictos, que desde el final de la dictadura en 1989 se han saldado con miles de campesinos y campesinas encarcelados y 129 asesinados. El sector campesino sufre además el abandono de las políticas públicas y la falta de inversión, mientras que la agricultura empresarial se beneficia de incentivos, exenciones fiscales, acceso al crédito y un control extremadamente laxo de la normativa ambiental y laboral. De esta forma se ha ido acentuando un modelo dual y excluyente que favorece la concentración de la tierra, la riqueza y el poder político.

La escalada en los precios de la energía y de los alimentos ha estimulado el interés del capital por el agro, que tras la crisis financiera busca nuevos sectores donde invertir. Numerosos fondos de inversión que persiguen la mayor ganancia en el mínimo tiempo posible han situado en el punto de mira el negocio de la producción y exportación de materias primas alimentarias y para la elaboración de agrocombustibles. Estas inversiones, muy lejos de representar oportunidades para los sectores campesinos, dan lugar a una mayor competencia por la tierra y causan graves impactos sobre el medio ambiente, la salud de las personas y sus medios de vida.

En Paraguay, el sector de la soja se encuentra en un proceso acelerado de expansión. El área de cultivo se ha duplicado en el último decenio hasta ocupar el 80% de la superficie destinada a la agricultura. Aproximadamente la mitad de esas tierras eran anteriormente estancias ganaderas, mientras que la otra mitad pertenecían a familias campesinas o indígenas. En muchos casos estas familias vendieron o alquilaron su propiedad o sus derechos de ocupación al verse rodeadas por el cultivo de soja y obligadas a convivir con la fumigación permanente de agrotóxicos.

El cultivo se da casi exclusivamente en grandes plantaciones, la mitad de las cuales se calcula que pertenecen a empresarios brasileños. La semilla de soja cultivada en Paraguay está patentada por Monsanto y ha sido genéticamente modificada para tolerar el glifosato. La aplicación masiva de este herbicida y otros agroquímicos causa graves daños al medio ambiente, la salud de las personas, sus cultivos y animales de cría, lo que ha sido ampliamente denunciado por organizaciones ambientalistas y campesinas, así como organismos internacionales. Sin embargo, el Estado paraguayo desatiende este problema y elude su obligación de hacer cumplir la normativa ambiental para proteger el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

En este contexto, la empresa Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP) ha tratado de diferenciarse del resto de actores en el sector al adoptar una política de responsabilidad social y ambiental y vincularse a la Mesa Redonda de Soja Responsable. Esta empresa demuestra un mayor respeto a la normativa ambiental, no ha adquirido tierras de pequeños propietarios y

ha establecido vías de colaboración con las poblaciones vecinas. Con el fin de lograr una relación positiva y evitar el conflicto, DAP puso en marcha una estrategia de inversión social, ambiental y productiva a través de organizaciones intermediarias como la Fundación Moisés Bertoni, la Sociedad de Estudios Rurales (SER) y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Por un lado se trató de acciones asistenciales, con un impacto muy limitado. Y en otras ocasiones se emprendieron iniciativas de desarrollo productivo basadas en la adopción de prácticas de cultivo mecanizadas e intensivas en la aplicación de agroquímicos.

Los resultados en las comunidades de Colonia Barbero, 12 de Junio y Agüerito cinco años después muestran un empeoramiento en la situación económica de un buen número de las familias que participaron en proyectos productivos, por lo que desde el punto de vista de la mejora de ingresos dichos proyectos pueden calificarse como un fracaso. En lugar de una mejora en sus ingresos gracias a la adopción de prácticas supuestamente más productivas, quienes adoptaron el modelo promovido por DAP quedaron atrapados en un ciclo de endeudamiento del que aún no logran recuperarse y como resultado muchas de estas familias han perdido sus principales activos. Ni DAP ni las organizaciones que llevaron a cabo estos proyectos tuvieron en cuenta lo suficientemente el contexto y las condiciones socio productivas locales, por lo que promovieron un modelo que no era el más adecuado e hicieron recaer prácticamente todo el riesgo de la inversión sobre las familias campesinas.

Por otro lado, a pesar de que DAP es más respetuosa con la normativa ambiental, el estudio documenta graves impactos sobre el entorno y la salud de las personas que viven cerca de sus plantaciones, asociados al uso intensivo de herbicidas y plaguicidas. También se ven afectados sus cultivos y animales de cría, poniendo en riesgo la subsistencia y la alimentación de esas familias. La gravedad de estos impactos muestra cómo tanto la responsabilidad social empresarial como los esquemas de tipo voluntario tales como la Mesa Redonda de Soja Responsable (a la que DAP está en proceso de afiliarse) resultan insuficientes para garantizar una efectiva protección de la salud y los derechos de las comunidades locales. Incluso en el caso de DAP, una empresa comprometida con apoyar el desarrollo comunitario y abordar el impacto de sus operaciones, las debilidades en la implementación de su política de responsabilidad empresarial han dado lugar a más problemas que beneficios. Por tanto, y dados los límites de la responsabilidad empresarial, para garantizar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente se requiere una normativa ambiental y laboral más estricta, y sin duda mecanismos más eficaces de fiscalización de su cumplimiento.

Por todo ello, los hallazgos de esta investigación ponen en cuestión la calificación de DAP como una empresa responsable y sostenible. A pesar de sus esfuerzos por reducir el impacto negativo y apoyar a las comunidades vecinas, forma parte de un sector que con su actual modelo de negocio agrava la concentración de la tierra y la riqueza, compite por recursos limitados, contamina el entorno, perjudica la salud de las personas y amenaza los medios de vida tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas. Si esto es así en el caso de DAP, es de esperar que en el resto del sector los efectos sean sin duda mucho más perjudiciales, pues la mayoría de las empresas ni siquiera tiene en cuenta su impacto sobre el entorno local en el que operan.

INTRODUCCIÓN

La presión sobre el sistema alimentario mundial es cada vez mayor a causa del cambio climático, una población en constante crecimiento y el incremento en la demanda de productos cárnicos y energía. La crisis financiera y la incertidumbre en otros sectores como el inmobiliario han estimulado el interés del capital privado por invertir en el agro. Diversos fondos de inversión han situado en el punto de mira el negocio de la producción y exportación de materias primas agrícolas. Inversiones que a menudo, muy lejos de representar oportunidades para los sectores campesinos, dan lugar a una mayor competencia por la tierra y causan graves impactos sobre el medio ambiente, la salud de las personas y sus medios de vida.¹

Ahora más que nunca es urgente invertir en la agricultura, sobre todo en la agricultura familiar, pues es la que produce la mayor parte de los alimentos consumidos en el mundo en desarrollo. Además de la inversión pública, las inversiones procedentes del sector privado pueden desempeñar un papel fundamental en la consecución de un crecimiento económico incluyente, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Estos beneficios, sin embargo, no se dan de forma automática sino que requieren el esfuerzo de empresas y gobiernos para garantizar que no se perjudica a las comunidades locales.

En el contexto de la campaña *CRECE*—que busca la justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados²— Oxfam ha centrado su atención sobre la velocidad y la magnitud de las adquisiciones de tierra a gran escala y sus efectos sobre los pequeños productores, y ha puesto en marcha estudios de caso para evaluar los impactos sobre las poblaciones locales de determinadas inversiones privadas en tierras. El objetivo de estos estudios es comprender mejor cómo se llevan a cabo estas inversiones, cómo afectan a las personas a nivel local, quiénes se benefician de ellas y si existe evidencia de impactos negativos, tanto directos como indirectos, a nivel local y nacional.

En Paraguay, el sector de la soja se encuentra en un proceso acelerado de expansión. El área de cultivo se ha duplicado en el último decenio hasta ocupar el 80% de la superficie destinada a la agricultura. Este crecimiento se ha dado por un lado a costa de desplazar la ganadería hacia el norte del país, y por otro ocupando tierras que anteriormente aprovechaban comunidades campesinas e indígenas. Oxfam ha identificado una empresa en este sector que ha recibido financiación de diversos inversores estadounidenses, europeos y latinoamericanos: se trata de NFD Agro, que opera por medio de su subsidiaria Desarrollo Agrícola del Paraguay. Esta compañía ha sido destacada por una empresa consultora del sector agroempresarial como un caso emblemático de transferencia de capital de inversión transnacional hacia la agricultura y por haber adoptado prácticas eficientes y sostenibles.³ Según esta fuente, las operaciones de estas empresas contribuyen a transferir buenas prácticas, aumentar el volumen y la calidad de materias primas agrícolas para los mercados nacionales y de exportación, crear oportunidades para las empresas locales, generar empleo y promover la participación de los pequeños productores en las cadenas de valor.

Este informe se centra en el caso de Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP), que se dedica a la producción y exportación de soja, entre otras materias primas agrícolas. Por una parte, el trabajo de investigación analizó en el terreno la percepción de sus operaciones por parte de las comunidades vecinas a las plantaciones, así como los impactos de su actividad en ámbitos como la salud de las personas y el medio ambiente, los medios de vida, el empleo y la seguridad alimentaria. Y por otra parte se valoraron los resultados de los proyectos comunitarios promovidos por la empresa como parte de su política de responsabilidad social empresarial. El estudio ha trascendido el análisis de las prácticas de esta empresa en particular para examinar el modelo de agricultura intensiva y a gran escala que se está expandiendo a

gran velocidad en Paraguay. Es importante señalar que existen otras empresas dentro del sector de soja cuyos impactos probablemente sean mucho más graves que los de DAP. No se debe considerar, por tanto, como un caso representativo sino que fue seleccionado precisamente por presentar rasgos diferentes, supuestamente más respetuosos con el entorno local.

Siguiendo la propuesta metodológica común aplicada en otros estudios de caso sobre inversión privada en agricultura y adquisición de tierras realizados por Oxfam, la investigación tuvo lugar en tres fases. La primera consistió en el análisis previo de la documentación disponible, incluyendo información sobre el contexto nacional, local y sectorial, el marco normativo y la documentación relativa a la empresa. La segunda fase tuvo lugar en el país, y consistió por un lado en entrevistas en Asunción con instituciones clave y por otro en la visita a las áreas afectadas por las explotaciones agrícolas de DAP. Finalmente, la tercera fase consistió en el análisis y sistematización de la información. El estudio se realizó en un tiempo total de dos meses, entre los meses de febrero y abril de 2013, incluyendo dos semanas en el país, de las cuales ocho días se trabajó en las comunidades afectadas por la empresa.

En la fase de terreno se visitaron todas las fincas que actualmente posee la empresa en el país, así como las comunidades del entorno más cercano y donde la empresa invirtió en proyectos productivos. Con el fin de recopilar la información acerca de los impactos, se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad y grupos focales con informantes clave: familias afectadas, líderes y lideresas comunitarios, trabajadores o ex-trabajadores de la empresa, autoridades locales, organizaciones campesinas, de mujeres e indígenas, ambientalistas, de desarrollo y de defensa de los derechos humanos, representantes de la empresa, instituciones estatales, organismos internacionales y expertos nacionales. El acceso a las comunidades y a las familias afectadas se vio facilitado por parte de organizaciones aliadas de Oxfam que trabajan en las zonas afectadas por las plantaciones de DAP. En primer lugar se entrevistó a los líderes comunales y a las familias sugeridas por éstos, aplicando posteriormente la técnica conocida como de “bola de nieve”, es decir, solicitando a cada familia entrevistada que sugiriese otra posible familia, y visitándolas en sus propios hogares. Se trató de abarcar una muestra lo más amplia posible, buscando una diversidad en las posiciones en los casos en que había opiniones enfrentadas respecto a la actividad de la empresa. La información brindada en las entrevistas y grupos focales se complementó con la observación directa en las fincas y el registro fotográfico. Posteriormente al trabajo de campo en las comunidades se realizaron entrevistas en Asunción en las que fue posible triangular la información, incluyendo la entrevista a los representantes de la empresa.

La primera sección del documento analiza el contexto nacional de pobreza y desigualdad en Paraguay, describe la situación de inequidad en el acceso a la tierra y examina el sector de la soja en particular. La segunda sección se centra en el caso de DAP: sus fuentes de financiación, sus líneas de negocio y la forma en que lleva a la práctica su política de responsabilidad social y ambiental. Se revisan los resultados de los proyectos de inversión productiva en varias comunidades con las que trabajó la empresa como parte de su política de responsabilidad social empresarial. Por último, se analizan los impactos de las operaciones de esta empresa en diversos ámbitos: la salud de las personas y el medio ambiente, los medios de vida, el empleo y la seguridad alimentaria.

PARTE I: EL CONTEXTO

POBREZA Y DESIGUALDAD EN PARAGUAY

Paraguay es uno de los países más pequeños de América del Sur, no tiene salida al mar y está rodeado por gigantes como Brasil o Argentina. Pese a una intensa migración interna hacia las zonas urbanas, sigue siendo un país fuertemente rural⁴ y su crecimiento económico se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, cuyas exportaciones (principalmente de soja y carne de vacuno) representan cerca del 80% del total.⁵ Gracias a este sector, en 2010 la economía paraguaya tuvo un crecimiento récord de más del 14%, situándose en el tercer puesto a nivel mundial y el primero de América Latina.⁶

Hoy Paraguay es el cuarto exportador de soja y el primer exportador de azúcar orgánica del mundo. Aún así, y pese al crecimiento alcanzado en la última década, sigue siendo el país más rezagado de América del Sur en materia de desarrollo humano. A nivel mundial ocupa el puesto 111 (entre 186 países) según el Índice de Desarrollo Humano, situándose en el grupo de desarrollo humano medio.⁷ Y unos ingresos promedio per cápita de 3.020 dólares lo sitúan dentro del grupo de ingresos medio-bajos.⁸ Los elevados índices de pobreza y desigualdad siguen siendo importantes desafíos. Si bien la tasa de pobreza nacional se redujo del 41,2% al 32,4% entre 2007 y 2011, la pobreza extrema apenas descendió del 23,2% al 18,0% durante ese mismo período según la Encuesta Permanente de Hogares (ver datos en la Tabla 1).⁹

Tabla 1. Incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en Paraguay en 2011.

	Habitantes	Pobreza (%)	Pobreza extrema (%)
Total país	6.464.648	32,4	18,0
Área urbana	3.823.364	23,9	10,0
Área rural	2.641.284	44,8	29,6

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Encuesta Permanente de Hogares de Paraguay, 2011.

Los datos revelan una profunda brecha entre el medio urbano y el rural, pues **casi la mitad de las familias rurales vive bajo el umbral de la pobreza** y sus ingresos no alcanzan a cubrir el 44,4% del costo de la canasta básica de consumo. Por otro lado, la proporción de hogares en situación de pobreza extrema es casi el triple en el área rural que en la urbana.

Esta persistencia de la pobreza está estrechamente ligada a la falta de acceso a la tierra. Se ha demostrado la correlación entre el tamaño de los predios y la situación de pobreza rural, concentrándose ésta entre las familias que poseen menos de diez hectáreas.¹⁰ Por otro lado, según un estudio del Banco Mundial, la probabilidad de ser pobre en Paraguay es mayor en hogares que poseen menos de 30 hectáreas, ya que experimentan muchas más dificultades para incorporarse a la agricultura comercial de mayor valor agregado.¹¹ La siguiente sección analiza el problema de la altísima inequidad en la distribución de la tierra.

EL PAÍS CON PEOR REPARTO DE LA TIERRA DE AMÉRICA LATINA

Paraguay es el país de América Latina donde la tierra está peor repartida (ver tabla 2), pues una élite de grandes latifundistas concentra casi toda la superficie agrícola y ganadera mientras que una inmensa mayoría de pequeños campesinos y campesinas carece de tierra suficiente para producir. A causa de la expansión del monocultivo -principalmente la soja- a lo largo de las últimas dos décadas, la concentración de la propiedad se ha intensificado aún más. Un factor que favorece el desplazamiento de la pequeña propiedad es la inseguridad en la tenencia de la tierra, pues la mayoría de las fincas pequeñas no cuenta con título de propiedad. Aún así, es frecuente la venta ilícita de los derechos de posesión, a menudo con la complicidad de las instituciones. Por otro lado, la entrega de tierras por parte del Estado a personas cercanas al régimen durante la dictadura de Stroessner ha dado lugar a numerosos conflictos por la tierra, pues el sector campesino reclama la restitución de estas tierras “malhabidas” a las familias sujetas a la reforma agraria.

Tabla 2. Índice de concentración de la tierra en algunos países de América del Sur

País	Índice de Gini	Año del último censo agropecuario
<i>Paraguay</i>	0.94	2008
<i>Brasil</i>	0.86	2006
<i>Colombia</i>	0.86	1971
<i>Perú</i>	0.86	1994
<i>Uruguay</i>	0.84	2000
<i>Ecuador</i>	0.81	2000
<i>Bolivia</i>	0.77	1984

Fuentes: FAO 2011, PNUD 2011, SIPAE 2011, ILC 2011.

El censo agropecuario nacional más reciente (de 2008) muestra cómo **el 80% de la tierra agrícola** (24,5 de los 31 millones de hectáreas de tierras de uso agropecuario) se concentra en menos de 4.800 fincas superiores a mil hectáreas y está **en manos del 1,6% de los propietarios** (ver Tabla 3). En el otro extremo, **el 84% de las fincas** (241.956 de las 289.649 explotaciones agropecuarias censadas) **son de menos de 20 hectáreas y apenas ocupan el 4,3% de la tierra de cultivo.**

A su vez, más de 180.000 familias (de las aproximadamente 500.000 familias que viven en el medio rural) no cuentan con el mínimo de diez hectáreas que se considera una unidad básica de economía familiar.¹²

Destaca también que las **600 grandes explotaciones superiores a 10.000 hectáreas ocupen el 40% de la superficie agropecuaria**, y además se hayan incrementado en número y superficie en el período intercensal (1991-2008). Existen casos extremos como el de Tranquilo Favero, quien posee unas 400.000 hectáreas en el departamento de Alto Paraná, de las cuales 110.000 serían tierras fiscales que obtuvo gracias a su relación con el dictador Alfredo Stroessner.¹³ También llama la atención el hecho de que los propietarios asociados (sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, cooperativas, etc.) constituyan apenas el 3,7% del total de las explotaciones y sin embargo acaparen el 49,5% del total de las hectáreas productivas censadas en 2008.¹⁴

Tabla 3. Cantidad y superficie de las fincas agropecuarias.

1. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

CUADRO 1: CANTIDAD Y SUPERFICIE DE LAS FINCAS AGROPECUARIAS.

	Cantidad de fincas		Superficie total (Ha)		Variación(%)		Superficie promedio de las fincas (Ha)		
	CAN 2008	CAN 1991	CAN 2008	CAN 1991	Fincas	Superficie	CAN 2008	CAN 1991	Variación (%)
PARAGUAY	289.649	307.221	31.086.894	23.817.737	-5,7	30,5	107	78	38,4
Tamaño de finca									
No tiene	774	7.962	-	-	-90,3	-	-	-	-
Menos de 1 Ha	15.586	21.977	6.894	8.499	-29,1	-18,9	*	*	14,4
De 1 a menos de 5 Ha	101.643	92.811	231.118	222.805	9,5	3,7	2	2	-5,3
De 5 a menos de 10 Ha.	66.218	66.605	416.702	430.658	-0,6	-3,2	6	6	-2,7
De 10 a menos de 20 Ha.	57.735	66.223	685.381	806.802	-12,8	-15,0	12	12	-2,6
De 20 a menos de 50 Ha.	22.865	31.519	619.986	857.909	-27,5	-27,7	27	27	-0,4
De 50 a menos de 100 Ha.	6.879	7.577	459.555	502.648	-9,2	-8,6	67	66	0,7
De 100 a menos de 200 Ha	5.234	4.279	699.257	569.169	22,3	22,9	134	133	0,4
De 200 a menos de 500 Ha	5.251	3.503	1.600.537	1.050.034	49,9	52,4	305	300	1,7
De 500 a menos de 1.000 Ha.	2.737	1.525	1.810.119	1.010.952	79,5	79,1	661	663	-0,2
De 1.000 a menos de 5.000 Ha	3.443	2.356	7.200.531	4.982.438	46,1	44,5	2.091	2.115	-1,1
De 5.000 a menos de 10.000 Ha.	684	533	4.702.034	3.644.873	28,3	29,0	6.874	6.838	0,5
De 10.000 y más Ha	600	351	12.654.779	9.730.949	70,9	30,0	21.091	27.724	-23,9

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Censo Agropecuario Nacional 2008.

La concentración de la propiedad de la tierra se ha agravado en años recientes, pues el índice de Gini¹⁵ pasó de 0,91 en 1991 a 0,94 en 2008. En ese mismo período, la frontera agrícola se expandió, aumentando en un 30% la superficie dedicada a la explotación agropecuaria.¹⁶ Dada la expansión acelerada de monocultivos como la soja en los últimos años, es de suponer que esta tendencia a una mayor concentración de la tierra se haya profundizado aún más desde el año en que se realizó el censo hasta ahora.

Teniendo en cuenta las diversas formas de tenencia de la tierra (título definitivo, documento provisorio, tierra alquilada, ocupante y otros), **dos tercios de las fincas de menos de 20 hectáreas no cuentan con título de propiedad definitivo.**¹⁷ De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), la razón es fundamentalmente económica, pues para la titulación se exige el pago del 25% del valor del lote.¹⁸

Para comprender el origen del problema de la tierra en Paraguay conviene hacer un poco de historia. En 1875 se creó la Oficina de Tierras Públicas donde los propietarios debían acreditar sus derechos de posesión. Una ley que autorizaba al Estado a vender las tierras públicas a quienes pudieran cancelar el pago en un año excluyó a los campesinos pobres. Incapaces de pagar por ellas, muchas comunidades perdieron sus tierras comunales y así pasaron a formar parte de una legión de campesinos sin tierra en un país de inmensos latifundios.¹⁹

La idea de una reforma agraria no se incorporó a la legislación hasta la década de 1930, aunque sin llegar a ser una política que transformara la estructura territorial. En 1963 se creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y se promulgó el Estatuto Agrario, comenzando un ciclo de colonizaciones masivas.²⁰ Se calcula que entre las décadas de 1960 y 1990 (durante la dictadura de Stroessner) se distribuyeron aproximadamente diez millones de hectáreas de tierra, gran parte de ellas ilícitamente a personas no sujetas de la reforma agraria: altos miembros del ejército, políticos y grandes empresarios del entorno cercano a la dictadura. Se trata de las llamadas tierras “malhabidas”, que se estima que ascienden a unos ocho millones de hectáreas.²¹ Esto ha provocado que los conflictos por la tierra sean uno de los problemas sociales de más trascendencia desde el inicio de la democracia en 1989.

Hoy en día se desconoce quiénes ocupan muchas de las tierras que fueron distribuidas por el Estado. Según el censo agropecuario de 2008 la agricultura familiar²² solamente posee 1.900.000 hectáreas.²³ Sin embargo el INDERT (y anteriormente el IBR) distribuyó más de 3.800.000 hectáreas, sobre todo en la región oriental.²⁴ Esto significa que en ese período **han pasado a manos de grandes y medianos propietarios la mitad de las tierras que habían sido distribuidas a personas sujetas a la reforma agraria.**

Esta transferencia de tierras se ha producido durante años por medio de la venta y alquiler de “derecheras”²⁵, a menudo a extranjeros, y en muchos casos con la complicidad de funcionarios del propio INDERT.²⁶ Se trata de una práctica delictiva muy común desde hace décadas, que desde 2012 puede ser castigada con penas de cárcel de hasta cinco años, tanto para quienes compran o venden los derechos como para el funcionario que extienda los documentos para validar la transferencia.²⁷

La lucha por la tierra se paga con la vida

Ante la inacción del Estado, la estrategia de los movimientos campesinos y de “sin tierras” ha consistido en la ocupación de latifundios. Con ello se obliga a los propietarios a negociar y a las autoridades a buscar una solución. En los primeros 15 años de democracia (entre 1990 y 2004) se contabilizaron 895 conflictos por la tierra, 571 manifestaciones, 370 ocupaciones de fincas y 357 desalojos violentos. En ese mismo período fueron detenidos al menos 7.296 campesinos y campesinas.²⁸ Si bien la principal reivindicación de los movimientos campesinos ha sido el acceso a la tierra, recientemente se ha sumado otra causa: frenar la expansión del cultivo de soja a gran escala por los daños a la salud y al medio ambiente asociados a la aplicación masiva de agroquímicos.

La protesta campesina ha sido reprimida con violencia por los órganos de seguridad del Estado y también se han producido ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales por parte de sicarios y paramilitares. Según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) con el reciente asesinato de Benjamín Lezcano (un dirigente campesino que encabezaba las protestas contra el monocultivo de soja) en febrero de 2013 ascienden a **129 los líderes campesinos asesinados** en el país desde el fin de la dictadura en el contexto de la lucha por la tierra.²⁹ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado la inacción de la justicia paraguaya, instándola a esclarecer el crimen y condenar a los culpables.

Unos meses antes, en diciembre de 2012, moría también asesinado Vidal Vega, uno de los líderes del Movimiento Campesino Sin Tierra y presidente de la Comisión de familiares de las víctimas de la matanza de Curuguaty (ver Cuadro 1), el hecho que dio lugar al juicio político por el que se destituyó al presidente Fernando Lugo y se impuso como presidente de facto Federico Franco.

Cuadro 1. El poder del agronegocio tras la destitución de un presidente

El 22 de junio de 2012, el Congreso paraguayo interrumpió el Gobierno de Fernando Lugo mediante un juicio político exprés, un año antes de concluir su mandato. La justificación de este juicio fue la masacre de Curuguaty del 15 de junio de 2012, producida cuando en el transcurso de una intervención judicial-policial en las tierras de Marina Cue, ocupadas por sin tierras, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los ocupantes en el que resultaron muertos 11 campesinos y seis agentes de policía, así como un número indeterminado de heridos por armas de fuego.³⁰

Gran parte de los análisis coincide en que la ruptura del proceso democrático estuvo motivada fundamentalmente por el temor de las clases que concentran los beneficios del desarrollo ante un Gobierno que suponían capaz de promover una distribución más equitativa de los mismos.

La gestión del Gobierno de Lugo desde su nombramiento en agosto de 2008 había tenido avances importantes. Por ejemplo, decretó la gratuidad de la sanidad pública y creó las Unidades Familiares de Salud. En educación, decretó la gratuidad de la educación media y generalizó la merienda escolar. En agricultura, lanzó el Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar que tenía la meta de alcanzar en 2013 a todos los productores con fincas inferiores a 20 hectáreas. El proceso iniciado también produjo giros importantes como el aumento de la participación social, mayor conciencia de la ciudadanía sobre sus derechos y una incipiente reducción de la pobreza, en parte producto de los programas sociales en marcha. Sin embargo, atado de manos por una correlación de fuerzas totalmente desigual en el Congreso, el Gobierno se resignó a incumplir otras promesas electorales como la redistribución de la tierra o la generalización de los programas sociales de combate a la pobreza.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno estuvo presionado por los gremios de la producción y las empresas multinacionales para que aprobase la comercialización de semillas genéticamente modificadas, principalmente de algodón y de maíz, así como nuevos eventos transgénicos de soja. El Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), institución encargada de velar por el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la inscripción de las nuevas semillas transgénicas, fue objeto de intimidaciones de todo tipo por oponerse a autorizar el uso de nuevas semillas sin la debida garantía de calidad y sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales y ambientales establecidos por el Estado. Esta política del SENAVE fue apoyada por organizaciones campesinas y de mujeres así como ONG ambientalistas que también manifestaban un claro rechazo al uso de las semillas transgénicas por los riesgos para la salud asociados al uso intensivo de herbicidas, especialmente en el caso de la soja transgénica.³¹

También las organizaciones campesinas presionaban por la reforma agraria y los sectores más conservadores lo acusaban por promover el acercamiento del país a las estrategias de integración impulsadas por el presidente Chávez de Venezuela. Por estas y otras razones, el Gobierno de Fernando Lugo había sido amenazado con un juicio político en 23 ocasiones. Sin soporte político institucional, las amenazas de destitución operaban como un chantaje permanente para evitar cualquier cambio importante en el país.

Con la ruptura del proceso democrático, los grupos económicos representados por los sojeros, las compañías multinacionales y los ganaderos resultaron claramente favorecidos. A escasos días de un cambio de Gobierno, la multinacional Monsanto lograba inscribir la semilla transgénica de algodón en el SENAVE y posteriormente sucesivos eventos de maíz transgénico eran aprobados por decreto sin la debida certificación por las instituciones pertinentes. Otras leyes, como la de la Franja de Seguridad Fronteriza (que Lugo reguló para exigir un mayor cumplimiento, en un intento de limitar la compra masiva de tierras por extranjeros) y la de Fitosanitarios también están siendo cuestionadas y revisadas por el actual Gobierno, con el objetivo de eliminar las trabas a la expansión del agronegocio.

Elaborado por Quintín Riquelme.

Políticas que fomentan un modelo dual y excluyente

En el agro paraguayo coexisten dos modelos de producción cuya convivencia resulta cada vez más difícil: por un lado la agricultura familiar campesina, básicamente productora de alimentos,³² y por otro la agricultura empresarial a gran escala orientada hacia la exportación. Esta última se insertó en Paraguay a partir de la década de 1970 en los departamentos del Alto Paraná, Canindeyú, Amambay e Itapúa, con la presencia de grandes empresas agroindustriales y medianos y grandes productores brasileños que compraron tierras masivamente en la cuenca del Río Paraná. Desde entonces la expansión de este modelo no cesa y hoy afecta a otros departamentos que tradicionalmente habían sido territorios campesinos e indígenas como Caazapá, Caaguazú y San Pedro.³³

Además de la profunda inequidad en el acceso a la tierra y otros recursos productivos, el sesgo hacia la agricultura empresarial en las políticas públicas ha favorecido la expansión de ésta y la marginalización de la agricultura familiar, especialmente de las mujeres productoras y la población indígena. Los programas e incentivos estatales para la producción agropecuaria han favorecido a las élites empresariales, las cuales han podido aprovechar mejor las nuevas oportunidades, acumulando cada vez más activos y poder político. Este sesgo agroexportador se da prácticamente en todos los países de América del Sur, si bien la magnitud del problema no es igual de aguda en todos ellos.³⁴

Buena parte de la inversión pública en agricultura consiste en subsidios. Algunos análisis indican que entre 1995 y 2000 más del 70% del gasto público agrícola en Paraguay se dio a través de subsidios, la mayoría de los cuales beneficiaron a los grandes productores que se dedican a la agroexportación.³⁵ Es el caso del subsidio al combustible, que disfrutaban casi exclusivamente los grandes productores pues son quienes practican la agricultura mecanizada. La investigación agraria tampoco se orienta adecuadamente hacia la producción campesina y familiar, pues el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) responde sobre todo a las necesidades de los grandes empresarios, representados en su junta directiva.³⁶

El sistema fiscal paraguayo tampoco contribuye a mejorar la distribución de la riqueza, por la baja presión tributaria. Es el único país de América Latina donde la soja no paga impuestos a la exportación.³⁷ Las propiedades rurales tributan anualmente en concepto de impuesto 23,5 veces menos que el promedio en América Latina y 45 veces menos que en los países desarrollados. Por los 30 millones de hectáreas de tierra productiva agropecuaria apenas se recaudan 0,16 dólares por hectárea y año.³⁸ Juntos, el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias (IMAGRO) y el impuesto inmobiliario representan un exiguo aporte a las arcas públicas. Todo ello contrasta con la rentabilidad del sector agropecuario y su peso en la economía nacional, según un análisis del sistema tributario paraguayo realizado por Oxfam que concluyó que existe un trato especialmente favorable para el agronegocio.³⁹

La Ley 60/90 de Incentivo a las Inversiones de capital establece otra serie de ventajas de las que disfrutaban sobre todo las empresas del agronegocio, pues son las que se pueden permitir realizar inversiones importantes. Entre estos incentivos están la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) en todos los bienes adquiridos, de los aranceles e impuestos a la importación de bienes y equipo, o la exoneración del 95% del impuesto sobre la renta durante los primeros cinco años del negocio, ampliable a diez años en caso de encontrarse en una zona de desarrollo preferente.

Otro incentivo indirecto para la inversión es la escasa e ineficaz regulación medioambiental y laboral, pues las licencias se conceden con gran facilidad y existe mucha permisividad ante el incumplimiento de la legislación en esta materia.⁴⁰ El Gobierno de Lugo trató de fortalecer las instituciones reguladoras y de control como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Secretaría del Ambiente (SEAM). Sin embargo tras la destitución de Lugo se han producido graves retrocesos.⁴¹

El acceso al crédito también está muy orientado hacia la agricultura empresarial. El Crédito Agrícola de Habilitación, creado para apoyar la pequeña producción, en la práctica ha canalizado el 90% de la financiación hacia los grandes productores agrícolas y ganaderos. Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Fomento. Una de las razones probables estriba en que en el caso del Banco Nacional de Fomento, tres de los siete miembros de la junta directiva pertenecen a los gremios agroempresariales, mientras que no hay ningún representante del sector campesino.⁴²

Paraguay cuenta además con una ley de Fomento de los agrocombustibles, promulgada en 2005, que declaraba de interés nacional la producción de materias primas para elaboración de biodiesel y etanol. Esta ley estableció beneficios para atraer la localización de empresas e industrias en nuevos “polos de desarrollo en el país” y fijó mandatos de mezclas en los combustibles con el fin de garantizar el mercado interno.⁴³

Mientras la agricultura empresarial se beneficia de todos estos incentivos, la inmensa mayoría de las comunidades campesinas nunca ha recibido apoyo del Estado. La inversión pública en la agricultura familiar campesina se situaba en 2009 en torno al 5% del gasto público total tras caer desde un 10-12% a principios de la década de 2000,⁴⁴ una cifra muy inferior a la importancia relativa del sector. Esta desatención hace que resulte muy difícil superar los obstáculos para desarrollar una producción competitiva y rentable y hacer frente a los riesgos inherentes a la actividad agrícola.

Uno de los principales problemas de la agricultura familiar es la ausencia de cultivos comerciales viables y rentables. Este lugar lo ocupó históricamente el algodón hasta que, debido a cambios en la política del MAG, la plaga conocida como *picudo* y la caída del precio internacional, la superficie cultivada se redujo desde 320.000 hectáreas en 2004 hasta una sexta parte en 2009. El sésamo ha pasado a ser uno de los nuevos cultivos más atractivos para la agricultura familiar y su superficie se duplicó entre 2006/2007 y 2008/2009 hasta alcanzar las 100.000 hectáreas. Los recientes fenómenos de sequía y la caída en los precios, sin embargo, han afectado mucho a la producción.⁴⁵

Cultivos como la soja, altamente dependientes de insumos externos y por tanto de capital, resultan inviables en las condiciones de la mayoría de las explotaciones familiares por la falta de acceso al crédito y porque el modelo de producción mecanizado requiere de una superficie mínima, así como la necesidad de alcanzar volúmenes de producción que permitan su entrada en el mercado. Aún en condiciones que posibiliten una rentabilidad económica, los impactos sobre la salud y el medio ambiente que se describen más adelante ponen en cuestión la idoneidad de este rubro para ser producido a pequeña escala.

Distintas formas de desplazar la agricultura campesina

Los actores de la agricultura empresarial, especialmente las empresas sojeras, recurren a distintas estrategias para adquirir el control de la tierra y expandir la producción en las fincas campesinas.⁴⁶

- Por medio de la compra directa, a menudo ilegalmente y en complicidad con el INDERT. Con la creciente competencia por la tierra se ha llegado a ofrecer hasta 15.000 dólares por hectárea en el departamento de Alto Paraná (uno de los que ha experimentado mayor avance de la soja).
- Por medio de alquiler. Ante la falta de alternativas de ingresos, muchas familias optan por alquilar sus derechos de propiedad.
- Por expulsión mediante contaminación por la aplicación intensiva de agrotóxicos, cuando la siembra se realiza hasta el límite del núcleo de población. En esos casos, resulta imposible la convivencia con las plantaciones por los daños que causan sobre la salud, los cultivos de subsistencia y los animales menores.

- Por mecanismos de endeudamiento, pues en algunos asentamientos las empresas ofrecen financiar la mecanización de las parcelas y los paquetes de semillas y herbicidas mediante crédito. A menudo la familia no es capaz de devolver estos créditos por lo que termina alquilando o vendiendo su tierra, con frecuencia a las mismas instituciones financieras.

El resultado es un desplazamiento de las comunidades campesinas e indígenas, más acelerado en los departamentos de la Región Oriental como San Pedro, Caaguazú y Canindeyú. Tal y como describe el representante de la Federación Nacional Campesina, “el monocultivo de soja está envenenando a comunidades enteras con fumigaciones masivas, eliminando la producción de autoconsumo para que abandonen su comunidad, ofreciendo mucha plata por su tierra y supuestamente ayudando a los pequeños productores dándoles crédito como una táctica para entrar en las comunidades. Hoy ya se ha eliminado a varias comunidades indígenas para cultivar soja en Caaguazú y Canindeyú”.⁴⁷

La venta de una pequeña propiedad (desde tres hectáreas hasta un máximo de diez hectáreas) supone para las familias que venden sus tierras un ingreso inmediato de efectivo. Sin embargo, al migrar a la ciudad normalmente no encuentran un trabajo estable por lo que consumen este dinero muy rápidamente y la familia queda en la indigencia.

Una preocupación expresada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) de esta forma: “El desarrollo del capitalismo está en el campo ahora. De los bienes naturales se está sacando riqueza. Hay todo un plan de acaparar nuestro territorio. Se van instalando las empresas multinacionales y van desapareciendo comunidades indígenas y campesinas”.⁴⁸

El avance del agronegocio ha estado en gran medida protagonizado por inversores extranjeros, especialmente procedentes de Brasil y Argentina.⁴⁹ Si bien no existen datos oficiales confiables sobre la superficie total en manos de propietarios extranjeros (pues a menudo las tierras se titulan a nombre de testaferros nacionales) se calcula que el ritmo de penetración es de unas 100.000 hectáreas al año, siendo más acelerado en las áreas fronterizas con Brasil de los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.⁵⁰ Según los datos disponibles en el censo agropecuario de 2008, 4,8 millones de hectáreas son propiedad de brasileños y 3 millones más están en manos de otras nacionalidades. Resulta entonces que de las 31.086.893 hectáreas de uso agropecuario censadas, casi ocho millones, es decir, **al menos el 25,3% de las tierras agrícolas y ganaderas del país pertenecen a propietarios extranjeros.**⁵¹

En Paraguay no existe un marco legal que restrinja de forma efectiva la compra de tierras por parte de extranjeros, quienes tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversores nacionales y se sienten atraídos por el menor precio de la tierra y la baja presión fiscal. Aunque la ley establece una franja de seguridad de 50 kilómetros en las áreas fronterizas, donde no se permite la compra por parte de extranjeros, esta restricción se incumple sistemáticamente.⁵²

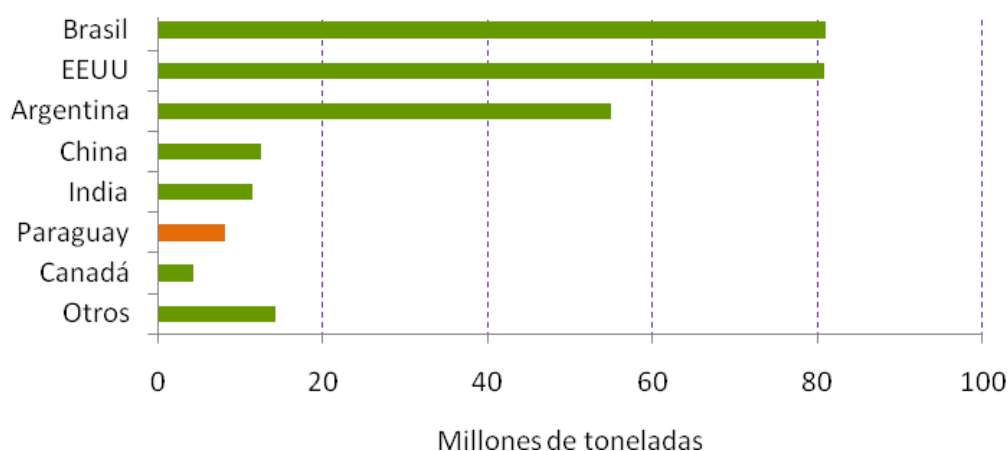
En la zona oriental del país, la alta competencia por la tierra ha empujado los precios al alza. Propietarios de grandes estancias ganaderas en esta zona venden su finca para comprar mucho más barato en El Chaco, al norte del país, donde se está dando una compra masiva de tierras para la ganadería. Se calcula que el precio de la tierra en la región norte se está incrementando a un ritmo del 20% anual.⁵³

En los distritos más afectados por el avance de la agricultura empresarial se ha observado un descenso importante en la producción de alimentos básicos como la mandioca, el poroto y el maní.⁵⁴ Según datos de la FAO, **entre los años 1999 y 2009 la producción per cápita de alimentos descendió desde 92 hasta 75 kilogramos por persona y año.**⁵⁵ Como consecuencia, la importación de alimentos ha aumentado al mismo ritmo. Datos de la Red de Importaciones y Exportaciones muestran que entre 2008 y 2011 el valor de la importación de alimentos se incrementó en un 48,5%, pasando de 233.584 millones de dólares a 454.087 millones de dólares en 2011. Un período en el que también aumentaron las importaciones de sustancias químicas y maquinaria en torno al 40%.⁵⁶

LA SOJA: EL MERCADO MUNDIAL DE LA SOJA

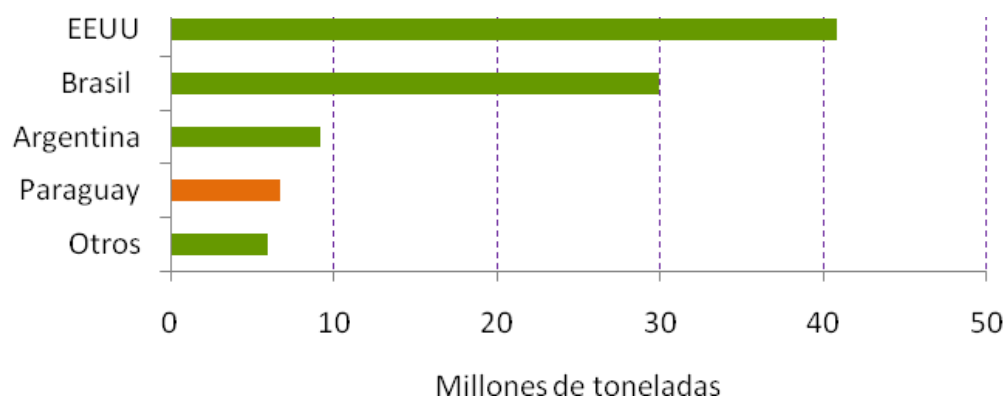
La soja es uno de los cultivos que se ha expandido más rápido en todo el mundo, especialmente en América del Sur, y su demanda no deja de aumentar por el incremento en el consumo de carne y productos lácteos y el *boom* en el mercado de agrocombustibles. Se trata del cultivo que ofrece más cantidad de proteínas por hectárea,⁵⁷ y se utiliza para elaborar piensos para el ganado, alimentos preparados, aceites vegetales, insumos industriales y recientemente agrodiesel. Los principales países productores son Brasil, Estados Unidos y Argentina (ver Gráfico 1). Las exportaciones las encabezan esos mismos países, que junto con Paraguay abastecen el 50% de la demanda mundial (ver Gráfico 2). En cuanto a los importadores, China ocupa el primer lugar seguida por la Unión Europea, México y Japón.

Gráfico 1. Principales países productores de soja (2012/13)



Fuente: USDA, Noviembre de 2012.

Gráfico 2. Principales países exportadores de soja



Fuente: USDA, Noviembre de 2012.

Cerca del 85% de la producción mundial de soja se procesa para producir pasta (utilizada en alimentación animal) y aceite (que en su mayoría se consume como aceite comestible y una parte sirve para elaborar derivados industriales como jabones y biodiesel). En Europa, las importaciones de soja se dispararon a raíz de la enfermedad de las “vacas locas” (encefalopatía espongiforme bovina) en la década de 1990, cuando los huesos animales se sustituyeron por la soja en la elaboración de piensos.⁵⁸ Los acuerdos comerciales impulsados por Estados Unidos para facilitar su acceso al mercado europeo, tales como el “Compromiso europeo de tarifa cero para granos oleaginosos”, también han contribuido al incremento de las

importaciones europeas de soja. Al eliminar los aranceles a la importación, la soja producida en América del Sur resulta más competitiva que la europea.⁵⁹

Producir aceite de soja cuesta aproximadamente el doble que producir aceite de palma, y por ello las procesadoras deben aprovecharse de importantes economías de escala para ser competitivas. A ello se debe que la industria de la soja sea tan intensiva en capital y que las mismas compañías (las conocidas como ABCD: ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus) tengan el control de la exportación en los principales países productores.

LA SOJA EN PARAGUAY

Según datos del censo agropecuario de 2008, de los más de 40 millones de hectáreas de superficie total de Paraguay, 31 millones se dedican a la producción agrícola, ganadera y forestal. El 60% de éstas (17.837.589 hectáreas) están ocupadas por la ganadería y apenas el 10% (3.365.203 hectáreas) por la agricultura, siendo el resto monte, barbechos y otros.⁶⁰ Según el mismo censo, **casi el 80% de la superficie de cultivo se destina al complejo sojero**⁶¹ mientras que menos del 17% se dedica a la producción de alimentos y otros rubros de renta del pequeño productor como algodón, tabaco o sésamo, entre otros.⁶²

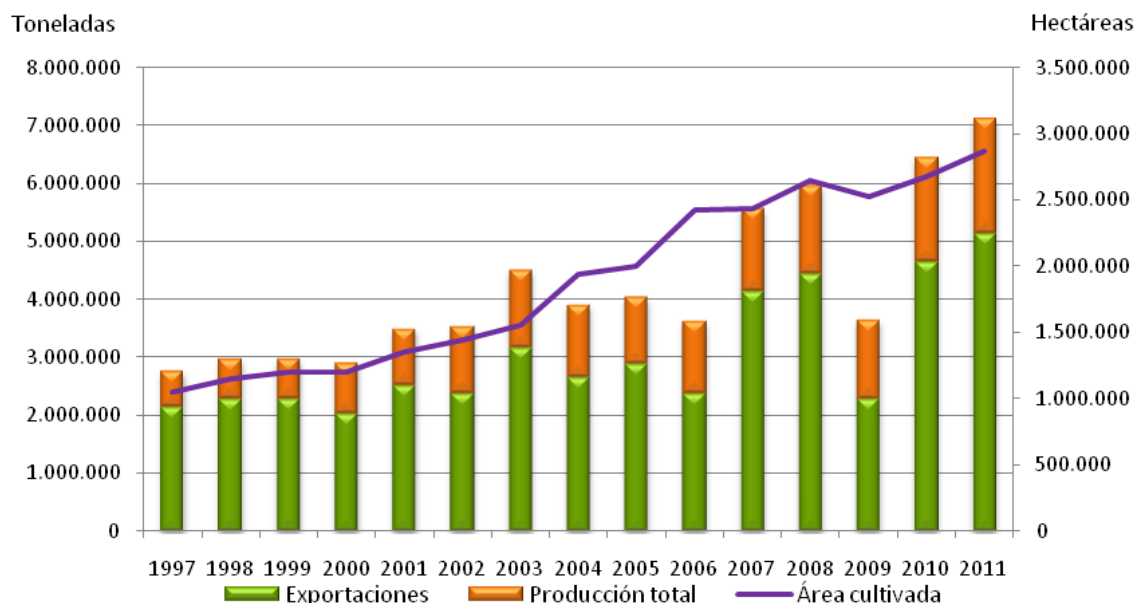
Paraguay es **el cuarto país exportador de soja del mundo** -después de Estados Unidos, Brasil y Argentina- **y el sexto productor** por detrás de Brasil, Estados Unidos, Argentina, India y China (en ese orden).⁶³ La agricultura es el motor económico, y genera más de la cuarta parte del empleo nacional.⁶⁴ La soja es el principal producto de exportación de Paraguay y uno de los rubros más importantes para su economía, pues por sí sola **aporta cerca del 9% del PIB nacional**.⁶⁵ Según datos de la Cámara Paraguaya de Comercializadores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), el sector de cereales y oleaginosas representa el 81% del PIB agrícola y el 55% del ingreso de divisas por exportaciones, 3.000 millones de dólares en inversiones y 250.000 puestos de trabajo.⁶⁶

Sin embargo, **la contribución de este sector en concepto de impuestos es prácticamente insignificante**. Por un lado, debido a los incentivos en forma de exenciones fiscales a la importación de bienes y equipos y por la ausencia de un impuesto a la exportación. Y por otro, ya que el impuesto inmobiliario que recaudan los municipios es irrisorio pues el valor fiscal de las tierras rurales está muy lejos del precio de mercado.

El potencial recaudatorio de un impuesto a la exportación de soja es muy significativo. De aplicarse una tasa del 6% (el mínimo del rango que se está debatiendo actualmente) al valor de las exportaciones de soja, en 2010 el Estado Paraguayo habría ingresado cerca de 90 millones de dólares.⁶⁷ **La recaudación potencial de un impuesto a la soja supera la inversión pública anual promedio en la agricultura familiar campesina paraguaya** durante el período 2005-2009.⁶⁸

La superficie destinada al cultivo de soja prácticamente se duplicó en el último decenio (ver Gráfico 3) hasta superar los **tres millones de hectáreas** en la campaña agrícola 2012/13.⁶⁹ Entre 2002 y 2012 esta superficie creció a un ritmo medio de más de 150.000 hectáreas por año, y algunas previsiones apuntan a metas de siete a ocho millones de hectáreas. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confía en incrementar el volumen de producción de soja sin aumentar necesariamente el área. Para ello está promoviendo la adopción de nuevas semillas genéticamente modificadas, teóricamente más productivas, que permitirían obtener mayores cosechas en la misma superficie de cultivo.⁷⁰

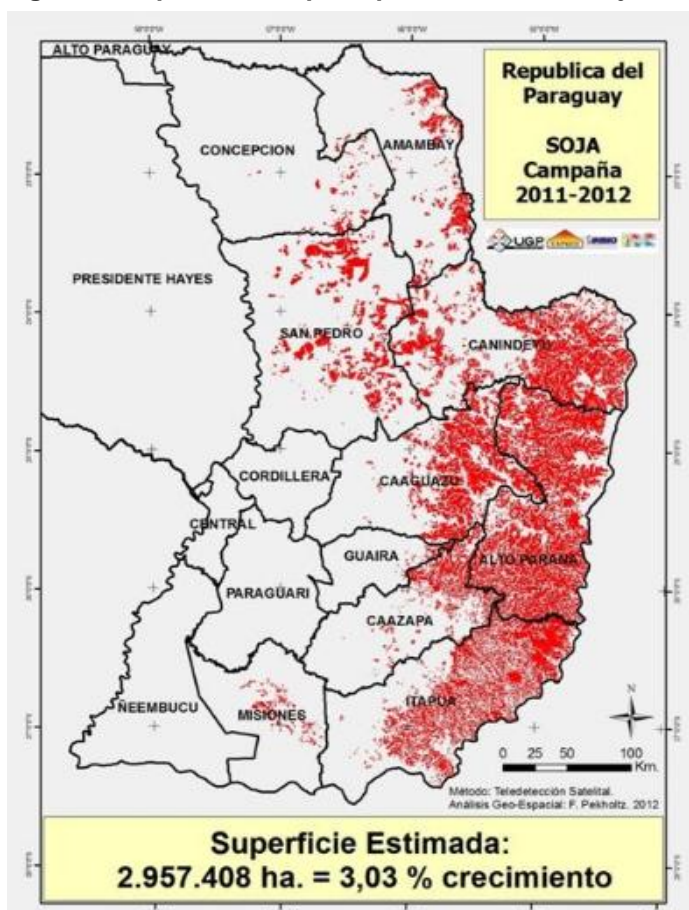
Gráfico 3. Evolución de la superficie cultivada, producción y exportaciones de soja en Paraguay entre 1997 y 2011.



Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO)

En un inicio, la soja se instaló en los departamentos fronterizos de Alto Paraná - un 68% de cuyo territorio estaba cultivado con soja en 2010⁷¹- e Itapúa, donde se encuentran las tierras más fértiles (ver Figura 1). Numerosos sojeros brasileños traspasaron la frontera atraídos por los bajos precios de la tierra, una mayor permisividad para deforestar y costes de producción más bajos.⁷² Posteriormente el cultivo se expandió hacia los departamentos centrales de San Pedro, Caazapá y Caaguazú, desplazando la actividad ganadera hacia el Chaco. Actualmente se están desarrollando semillas resistentes a la sequía, capaces de adaptarse a las condiciones del suelo para poder sembrar también en esa región, donde se calcula que habría 1,5 millones de hectáreas aptas para el cultivo de soja.⁷³

Figura 1. Superficie ocupada por el cultivo de soja en la campaña 2011/2012



Fuente: CAPECO, basado en estudio satelital.

En cuanto a la producción, en años recientes se han dado altibajos debidos a fenómenos de sequía. En 2009 la cosecha fue casi la mitad de lo previsto debido a la sequía (ver Gráfico 3) y en 2012 apenas se alcanzaron los 4,3 millones de toneladas respecto a los más de siete millones de toneladas esperados.⁷⁴ Para la campaña 2012/13, por el contrario, se ha obtenido una cosecha récord de 9,3 millones de toneladas, superando todas las previsiones.⁷⁵

El 70% de la soja producida en Paraguay se exporta en forma de grano. Existe poca capacidad de procesarlo nacionalmente, debido a la escasa infraestructura para la obtención de aceite u otros derivados.⁷⁶ Actualmente se está ampliando esta capacidad con la construcción de nuevas plantas por parte de ADM, Cargill y Louis Dreyfus, entre otros. En cuanto al destino de la producción, **cerca del 60% de la soja se exporta a la Unión Europea** según datos de CAPECO,⁷⁷ si bien se realiza a través de otros países como Uruguay, Argentina y Brasil, aprovechando la red de transporte fluvial. En cuanto a su uso final, sin embargo, no es posible conocer qué parte de la soja adquirida por Europa se utiliza para la producción de agrodiesel y qué proporción para alimentación animal u otros posibles usos, ya que desde el momento en que el producto se embarca para su transporte internacional se pierde la trazabilidad del grano producido en el país.

El cultivo de la soja está asociada a las grandes plantaciones, pues en 2008 **casi el 90% se sembró en explotaciones de más de cien hectáreas** y el 63% superiores a 500 hectáreas. Algunos análisis sostienen que la escala mínima para producir soja de forma rentable es de mil hectáreas.⁷⁸ Aun así, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola está tratando de desarrollar variedades de soja que sean productivas a pequeña escala, pues hasta ahora los pequeños productores no se benefician de las oportunidades que presenta este cultivo.⁷⁹ La mayor parte de la superficie de cultivo de soja está en manos de brasileños: el 64% en todo el país⁸⁰ y hasta un 80% en algunos distritos del área fronteriza.⁸¹ Uno de los mayores productores es Tranquilo

Favero, un brasileño asentado en Paraguay que está presente en todos los departamentos sojeros y se calcula que posee unas 140.000 hectáreas en producción, lo que le ha convertido en “el rey de la soja”.⁸²

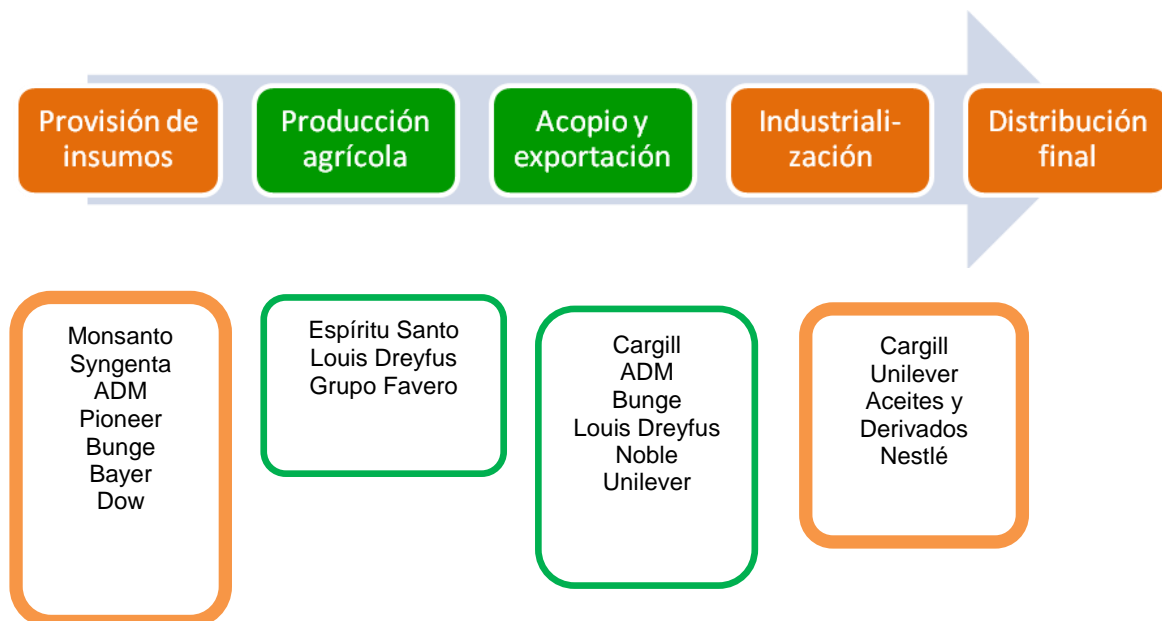
Aproximadamente la mitad de la superficie actualmente ocupada por el cultivo de soja eran estancias ganaderas que han sido transformadas en plantaciones, mientras que **la otra mitad eran tierras pertenecientes a familias campesinas** que fueron adquiridas por medio de la venta, el alquiler o el desalojo.⁸³

La cadena de valor de la soja en Paraguay

La cadena de valor⁸⁴ de la soja se puede dividir en cinco fases (ver Figura 2). De éstas, sólo dos (en verde en el gráfico) se realizan dentro del país. Según un analista nacional “la producción de soja es casi una maquila en Paraguay pues los insumos vienen de fuera, acá está la tierra y el agua y la misma empresa proveedora muchas veces es la exportadora. Entrega los insumos y el crédito al productor y la producción está comprometida previamente. El productor sólo es un eslabón en el proceso”.⁸⁵

Las compañías transnacionales dominan toda la cadena, determinando qué y cómo producir. Las transnacionales del sector de la agroindustria que operan en Paraguay son ADM, Basf, Bayer, Bunge, Cargill, Conti Group, Dow Agrosciences, Louis Dreyfus, Nestlé, Noble, Parmalat y Unilever. En 2008, Cargill exportó soja por valor de 1.268 millones de dólares, seguida por ADM con 487 millones y Bunge con 261 millones.⁸⁶ Algunas de las corporaciones proveedoras de insumos son al mismo tiempo exportadoras, y se aseguran el suministro a través de contratos y ofreciendo financiación. Cargill, ADM, Bunge, Noble, Louis Dreyfus y el Grupo Favero (en orden de importancia, según el ranking de exportadores de 2012) concentran el **80% de las exportaciones de soja y sus derivados**,⁸⁷ y disponen de infraestructura propia para el transporte que incluye silos, flotas de embarcaciones y puertos de embarque en todo el país.

Figura 2. Transnacionales que participan en la cadena de valor de la soja



Fuente: Elaboración propia basado en Luis Rojas, 2009.

Hasta muy recientemente, **las compañías transnacionales** se limitaban a operar en la distribución de insumos, el acopio y la comercialización, sin participar directamente en la

producción agrícola. Sin embargo **últimamente se han involucrado en la adquisición de tierras a través de compañías subsidiarias**. Esto revela un cambio de orientación que probablemente responda al valor creciente de la tierra como activo productivo y al objetivo de lograr una mayor integración vertical en la cadena de producción.⁸⁸

Transgénicos, agroquímicos e impactos sobre la salud

Paraguay es el país del mundo con mayor proporción de superficie cultivada con semillas transgénicas (un 66%) seguido por Argentina, Uruguay y Estados Unidos.⁸⁹ En el caso de la soja, la semilla genéticamente modificada empezó a cultivarse en Paraguay en 1997, antes de que su uso estuviese permitido, por medio del contrabando desde Argentina y Brasil.⁹⁰ El 95% de la soja que hoy se cultiva en Paraguay es Roundup Ready (RR), modificada genéticamente para tolerar el glifosato (el ingrediente activo del Roundup), un herbicida no selectivo popularmente conocido como “matatodo” que se aplica durante todo el ciclo del cultivo. Tanto la semilla como el herbicida han sido patentados por Monsanto, que recauda en Paraguay unos 35 millones de dólares anuales en concepto de regalías.⁹¹

Una de las ventajas que se atribuyen a la soja RR es que permite realizar siembra directa, al eliminar con el glifosato toda forma de vida vegetal excepto el cultivo. Las empresas como DAP han promovido esta práctica como beneficiosa para el medio ambiente argumentando que contribuye a conservar el suelo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el impacto que supone sobre el entorno y las personas la aplicación de enormes dosis de herbicidas y otros agrotóxicos. Las organizaciones ambientalistas calculan que en Paraguay **se aplican cerca de 30 millones de litros de agroquímicos en cada ciclo de cultivo de soja**.⁹² Con el tiempo, las malas hierbas han desarrollado resistencia al glifosato, por lo que cada vez es necesario recurrir a mayores cantidades y nuevas combinaciones de herbicidas más potentes.⁹³

Por otro lado, con el fin de facilitar la cosecha y obtener una maduración uniforme del grano, se aplica un producto desecante, que suele ser Paraquat (prohibido en Finlandia, Suecia y Noruega por su alto grado de toxicidad) o 2,4-D (también prohibido en Colombia y Suecia).⁹⁴ El 2,4-D está además incluido en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Pesticide Action Network International (PAN).⁹⁵ En cuanto al glifosato, se trata de un producto “ligeramente peligroso”, clase III, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).⁹⁶ Esta clasificación, así como el criterio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se basan en que el glifosato se descompone rápidamente sin causar daños al medio ambiente ni a las personas. Sin embargo, otros estudios muestran graves peligros para la salud asociados a la aplicación masiva de glifosato, entre los cuales se mencionan alteraciones celulares, en las enzimas y en los órganos reproductores, posible acción carcinogénica y malformaciones observadas bajo dosis muy inferiores a las utilizadas habitualmente en la agricultura.⁹⁷

La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) ha llevado a cabo un diagnóstico con la facultad de Medicina de Paraguay, comparando comunidades muy expuestas al cultivo de soja con otras no expuestas. En las comunidades más expuestas se observó un índice muy superior de afecciones respiratorias, alergias, problemas en los ojos y oídos, leucemia y cáncer de hígado, de mama y de útero.⁹⁸ Por su parte, la Federación Nacional Campesina (FNC) ha realizado un seguimiento de los problemas de salud asociados a la fumigación masiva. Según sus datos –sin publicar–, en los últimos años se ha multiplicado por seis la incidencia de enfermedades relacionadas con la exposición a los agroquímicos, tales como la leucemia.⁹⁹

Instituciones estatales como el Ministerio de Educación también han expresado su preocupación por la convivencia forzosa con las fumigaciones de plaguicidas. En 2010 esta institución contabilizó 264 escuelas rodeadas por campos de soja y calificó la situación como alarmante.¹⁰⁰ Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en 2007 alertó sobre la expansión de la soja en Paraguay y sus efectos sobre la salud,

señalando que “la expansión del cultivo de soja ha traído aparejado el uso indiscriminado de agroquímicos, provocando muertes y enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas y afectación a los recursos tradicionales alimenticios de las comunidades”.¹⁰¹

Apenas una condena a los sojeros frente a más de 800 campesinos detenidos

El caso de Silvino Talavera sentó un precedente legal en 2005. Silvino tenía 11 años y volvía de la escuela mientras fumigaban una plantación de soja cercana. Una nube de *Roundup* lo envenenó y causó su muerte pocos días después. Tras una larga batalla judicial, los empresarios sojeros alemanes Hermann Schlender y Alfredo Laustenlager fueron sentenciados por homicidio a dos años de cárcel, si bien nunca ingresaron en prisión.¹⁰² Éste ha sido hasta ahora el único caso donde se ha dictado una condena. Las organizaciones sociales y campesinas acusan a los funcionarios municipales de no gestionar adecuadamente las denuncias que se presentan por intoxicación y por incumplimiento de la normativa ambiental.¹⁰³

La propia Secretaría del Ambiente reconoce las dificultades para proteger el derecho a un ambiente sano, al afirmar que “una comunidad sólo tiene posibilidad de hacer valer su derecho a un medio ambiente sano si consigue la atención de los medios de comunicación”.¹⁰⁴

Ante la inacción del Estado y la impunidad con que las empresas violan la legislación ambiental, las personas afectadas a menudo se organizan para tratar de detener la aplicación masiva de plaguicidas pero se arriesgan a ser detenidas y condenadas por coacción.¹⁰⁵ De esa forma, “al criminalizar la protesta, se logra desmovilizar la resistencia a los monocultivos”.¹⁰⁶

Entre 2008 y 2009 fueron detenidas 819 personas por ejercer resistencia ante el avance de los agronegocios. El mayor número de detenciones se produjo en el departamento de San Pedro, con 160 personas detenidas sólo en 2009.¹⁰⁷

Otras veces el Estado reprime con violencia a quienes se resisten a los monocultivos. En 2002 los vecinos de la comunidad de Ipecuá, en el departamento de Caaguazú, se organizaron para cortar las rutas e impedir la fumigación. Un camión donde viajaba un grupo de 40 personas para acompañar a una comunidad que se resistía a la fumigación fue ametrallado por la policía. Como resultado, dos campesinos murieron y varios resultaron gravemente heridos.¹⁰⁸

Insuficiente registro de los casos y una normativa a la baja

La OMS ha alertado acerca de la elevada mortalidad debida a intoxicación aguda por plaguicidas (IAP) en el mundo en desarrollo a causa de una insuficiente regulación, la falta de sistemas de vigilancia y un laxo cumplimiento de las normas. Para avanzar en la prevención y el tratamiento y poder estimar mejor su incidencia, la OMS ha propuesto, entre otras medidas, mejorar la identificación y el diagnóstico sobre el terreno en los centros de salud rurales.¹⁰⁹ El Ministerio de Salud de Paraguay creó en 2003 un registro sobre los casos de IAP pero se enfrenta a las carencias formativas en materia de agrotóxicos entre el personal médico local y la ausencia de medios suficientes para un diagnóstico adecuado.¹¹⁰ Esto impide conocer la magnitud real del problema.

La Ley 3742/09 de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola, aprobada en 2009 bajo el Gobierno de Lugo, ha sido sin embargo muy criticada por los sectores sociales y también por el Ministerio de Salud y la Secretaría del Ambiente por considerar que no protege adecuadamente la salud de las personas y por dejar su fiscalización exclusivamente en manos del SENAVE. Esta ley suavizaba los requisitos que estaban en vigor, reduciendo las franjas de protección en caminos vecinales y en arroyos, eliminando la fiscalización de la pulverización aérea o la obligatoriedad de aviso previo y disminuyendo las sanciones en caso de infracción.¹¹¹ Algunos de los aspectos que se modificaron en la ley se detallan en la Tabla 4.

El Estado, que debería proteger el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente saludable, incumple esta obligación sistemáticamente bien sea por la influencia de los grupos de presión del sector sojero o por su propia incapacidad.¹¹² Los recursos de que dispone la

Secretaría del Ambiente (SEAM) para fiscalizar el cumplimiento de la legislación son mínimos: apenas cinco funcionarios para todo el país. Tampoco existen juzgados especializados en delitos ambientales, lo que dificulta la acción judicial.¹¹³ Una falta de medios también afecta al SENAVE, pues sólo cuenta con cinco técnicos para el departamento de San Pedro y otros cinco para el de Caazapá para hacer todos los recorridos de inspección sobre el uso de agroquímicos.¹¹⁴

Tabla 4. Cambios en la Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola.

	Decreto 1937/09	Ley 3742/09
<i>Barrera viva para caminos vecinales</i>	Mínimo 10 m de ancho y 2 m de alto, con especies de forraje denso.	10 m de ancho y 2 m de alto. Elimina la obligatoriedad del follaje denso.
<i>Franja de protección para pulverización terrestre</i>	100 m a la redonda de núcleos poblados, escuelas, centros de salud, etc. y cursos de agua.	100 m, pero elimina los cursos de agua.
<i>Franja de protección para pulverización aérea</i>	Mínimo de 200 m a cualquier centro poblado, cursos de agua, caminos vecinales u otras zonas que requieran protección.	No prevé ninguna franja especial para fumigación aérea.
<i>Fiscalización de la pulverización aérea</i>	Presencia obligatoria de un técnico del M. de Salud, SEAM y SENAVE, a quienes deben avisar con 48 horas de antelación.	Elimina esta obligatoriedad.
<i>Aviso previo</i>	Obligatorio para pulverización aérea o terrestre, a vecinos colindantes e instituciones, a través de formulario, por radio y televisión local.	Elimina la obligatoriedad de aviso previo.
<i>Sanciones por incumplimiento</i>	Multa. Cancelación inmediata de la licencia ambiental Asumir los costos de estudios médicos y tratamiento de víctimas.	Apercibimiento. Multa.

Fuente: Educación para la Acción Crítica et al. 2010.

¿Responsabilidad empresarial o lavado de imagen?

La Mesa Redonda de Soja Responsable

La preocupación acerca de las consecuencias negativas asociadas a la expansión de la soja y otros monocultivos se ha intensificado en las últimas décadas en todo el mundo. En el caso de Paraguay, varias organizaciones sociales han documentado exhaustivamente los impactos de este modelo productivo sobre las personas y el medio ambiente, contribuyendo a un debate más profundo acerca de los beneficios y los perjuicios obtenidos.¹¹⁵

En respuesta a estos cuestionamientos, se han puesto en marcha varias plataformas que proponen esquemas voluntarios de certificación que den lugar a una producción más sostenible y responsable. El principal foro internacional en el sector de la soja (no el único, aunque sí el que convoca a más actores) es la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS por sus siglas en inglés) que agrupa a 150 miembros, de los cuales 102 son empresas del sector (productoras, comercializadoras, proveedoras de insumos y financieras) frente a 16 organizaciones de la sociedad civil. Entre las primeras se encuentran poderosas transnacionales como ADM, Cargill, Bunge, Shell, Unilever, Carrefour, Wilmar, Bayer, Monsanto y Syngenta, y entre las segundas hay ONG como World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy y la holandesa Solidaridad. No existe participación de ninguna organización indígena ni campesina.

La RTRS fue creada en 2006 en Suiza por WWF y otros miembros fundadores con la misión de “promover que la soja actual y futura sea producida de manera responsable para reducir los impactos sociales y ambientales, manteniendo o mejorando el estatus económico para el productor”.¹¹⁶ Varias compañías transnacionales se incorporaron a la RTRS tras abandonar los Principios de Basel que no permitían el uso de transgénicos y eran muy exigentes en cuanto a la deforestación y el cambio de uso del suelo.¹¹⁷ En 2009, la RTRS aprobó sus propios principios y criterios de responsabilidad (posteriormente actualizados en 2010), los cuales han sido muy cuestionados por organizaciones ambientalistas y campesinas por permitir la inclusión de la soja transgénica y por lo que consideran como unas débiles exigencias en cuanto al uso de pesticidas, el respeto a los derechos de la población local y la deforestación (pues se permite convertir áreas que hayan sido degradadas antes de 2009, mientras que otros estándares fijaban el límite en 2004).¹¹⁸

Los estándares de la RTRS están basados en parte en el cumplimiento de la legislación nacional. Quienes cuestionan la eficacia de este tipo de esquemas voluntarios defienden la necesidad de un mayor control por parte del Estado, por un lado, y señalan que al aplicarse exclusivamente a nivel de finca no abordan los impactos a gran escala. Numerosas organizaciones han expresado su preocupación acerca de que los mecanismos voluntarios que han proliferado en las últimas dos décadas no hayan sido capaces de promover cambios significativos en las prácticas empresariales, entre otras razones porque no suelen implicar a los gobiernos y porque las empresas pueden optar por respetarlos o no.¹¹⁹ Algunas organizaciones se oponen frontalmente a la RTRS por considerar que resulta ineficaz y facilita el lavado de imagen.¹²⁰ También hay quienes afirman que, en ausencia de una normativa estatal eficaz que regule las inversiones, dichos estándares ofrecen un mecanismo para que las empresas actúen de una forma más responsable, y se vean obligadas a rendir cuentas ante los diferentes actores implicados, incluyendo a las comunidades afectadas.¹²¹

Resulta muy difícil valorar el impacto relativo de estos esquemas voluntarios, que en todo caso puede resultar una gota en el océano. En 2011 se certificaron de forma voluntaria bajo los estándares de la RTRS las primeras 150.000 hectáreas de soja en América del Sur, la mayoría en Argentina y Brasil. En 2012 la superficie certificada rondaba las 330.000 hectáreas. Cifras muy modestas si se comparan con la superficie total cultivada en la región, pues en Argentina, Brasil y Paraguay supera los 45 millones de hectáreas. En Paraguay la única empresa que

dispone de certificación es Cytasa, con 2.765 hectáreas, y DAP se encuentra en proceso de obtenerla.¹²²

La adhesión a un esquema de certificación puede estar motivada en parte por la búsqueda de ventajas comerciales. También puede responder al interés de reducir el riesgo de marca o satisfacer la demanda de nichos de mercado para productos “sostenibles” o “responsables”. En julio de 2011 la Comisión Europea dictaminó que los estándares de la RTRS satisfacen los requisitos de la Directiva Europea sobre Energía Renovable.¹²³ Esto implica una mayor apertura del mercado europeo a la soja certificada por la RTRS, la cual podrá recibir apoyo gubernamental y contabilizar en las metas de uso de agrocombustibles en el sector del transporte. Varias organizaciones sociales y ambientales cuestionan los criterios de sostenibilidad de la Comisión Europea para agrocombustibles, pues se centran fundamentalmente en evitar la deforestación mientras que ignoran los impactos sociales, los derechos sobre la tierra y otros impactos sobre las comunidades locales.¹²⁴

Empresas sojeras y ONG, ¿una alianza para evitar el conflicto?

Las primeras iniciativas de responsabilidad social empresarial en Paraguay se remontan a finales de la década de 1990, cuando algunas empresas comenzaron a canalizar sus acciones de filantropía a través de organizaciones de la sociedad civil. Si bien no fue hasta la segunda mitad de la década pasada que este concepto adquirió importancia gracias a iniciativas como el Pacto Ético Comercial, el programa “Incorporando prácticas de responsabilidad empresarial en Pymes”, el Programa Latinoamericano de RSE o la constitución en 2008 de la Red del Pacto Global Paraguay, integrada por 45 organizaciones y empresas.¹²⁵ Uno de los actores que más ha impulsado los principios y la puesta en práctica de la RSE en Paraguay ha sido la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay (ADEC),¹²⁶ que anualmente organiza un congreso sobre la materia.

Con el fin de fortalecer sus acciones en materia de responsabilidad empresarial, algunas empresas se han asociado a ONG o creado sus propias fundaciones. La Tabla 5 identifica algunas de estas alianzas.

Por otro lado, ante la escasa presencia del Estado que a menudo se da en las áreas rurales, las empresas a veces satisfacen algunas necesidades básicas de la población y de esa forma son mejor aceptadas. Los hay más escépticos: según una organización social nacional, “las empresas buscan una cara amistosa y por eso se asocian con ONG ambientalistas y emprenden pequeños proyectos que legitimen las consecuencias negativas de sus operaciones. Y a veces asumen el papel del Estado ausente, en una lógica feudal que se mantiene hasta hoy”.¹²⁷ En otros casos, como se presenta más adelante en el caso de DAP, impulsan proyectos productivos que promueven entre familias campesinas el mismo modelo de producción intensivo que aplica la agricultura empresarial. El Cuadro 2 presenta distintos puntos de vista acerca de estos esfuerzos.

Tabla 5. ONG asociadas a empresas sojeras en Paraguay.

Empresa	ONG
<i>Agroñacunday (pertenece al grupo brasileño Terra Viva)</i>	Guyra Paraguay (vinculada con WWF)
<i>Desarrollo Agrícola del Paraguay</i>	Fundación Moisés Bertoni Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) FUNDECA
<i>Grupo Espíritu Santo</i>	Fundación Moisés Bertoni
<i>Agrorama (brasileña)</i>	Fundación AMAR

Fuente: Luis Rojas (2009) Actores del agronegocio en Paraguay

Cuadro 2. Distintas percepciones sobre la responsabilidad empresarial

No es posible reparar el daño que causan con este modelo productivo. El daño que se produce sobre el ambiente y las comunidades es incalculable y obliga a la gente a migrar.

Entrevista a la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, 12 de febrero de 2013.

Es una táctica más: por un lado debilita la posibilidad de resistencia contra el modelo de producción, porque involucra a los pequeños productores en el mismo circuito productivo; y por otro si viene una adversidad climática los pequeños productores pierden su producción y para cubrir su deuda le entregan su tierra.

Marcial Gómez, Federación Nacional Campesina. Entrevista el 13 de febrero de 2013.

Nosotros vamos a seguir creciendo y evolucionando en este modelo. Creemos que hacemos las cosas mejor que el Estado y que la mayoría del sector privado. No tenemos soluciones perfectas pero sí una actitud que nos hace aprender y nos dice que como empresarios no podemos prosperar como una isla de prosperidad en un océano de miseria.

Roberto Codas, accionista de DAP. Entrevista el 22 de febrero de 2013.

PARTE II: EL CASO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL PARAGUAY

PERFIL DE LA EMPRESA

Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP) forma parte de NF Developers¹²⁸, una compañía registrada en Bermudas que lanzó sus operaciones en Paraguay en 2005 a través de varias subsidiarias. Se trata de un consorcio de tres empresas con diferentes líneas de negocio: Sociedad de Inversión Agropecuaria del Paraguay para la compra-venta de tierras; Frontera Agropecuaria del Paraguay, centrada en la transformación de estancias ganaderas en plantaciones intensivas¹²⁹; y Desarrollo Agrícola del Paraguay para la producción y exportación de materias primas agrícolas.(ver Figura 3).

Figura 3. Empresas subsidiarias de NF Developers



Fuente: Elaboración propia con datos de DAP

Los dos accionistas principales de DAP son el fondo de inversión Mercosur Agro Frontiers Fund, destinado a adquirir en Paraguay tierras ganaderas y transformarlas en plantaciones de agricultura intensiva, y NFD Agro Limited. Además participan varios accionistas nacionales, entre ellos el empresario de la publicidad Pascual Rubiani, vinculado a la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay (ADEC). La mayoría de los accionistas nacionales no contaban con experiencia previa en el sector agrícola y se asociaron a empresarios argentinos encabezados por Alejandro Preusche, quien a su vez es el presidente de NF Developers y miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Argentina (ACDE). Este conjunto de inversores locales e internacionales, de forma asociada, aportó el capital inicial con el que constituyeron la empresa y posteriormente lograron interesar a otros inversores internacionales entre los que se encuentran:¹³⁰

- el grupo inversor The Rohatyn Group (TRG),
- el banco estadounidense JP Morgan
- Berkeley International Capital Corporation,
- otros inversores particulares de América Latina y Europa.

La **Corporación Financiera Internacional** (CFI) del Banco Mundial también aportó financiación a DAP a través de dos proyectos: uno en 2009 con 20 millones de dólares (15 millones de crédito y 5 millones como capital riesgo) y otro en 2011 por 8 millones de dólares en forma de crédito. Estos fondos sirven para financiar las necesidades permanentes de capital de trabajo con el fin de mantener las operaciones agrícolas.¹³¹

Cuadro 3. ¿Por qué el Banco Mundial financió la inversión de DAP?

Según la Corporación Financiera Internacional, “la reconversión de tierras ganaderas a un sistema de producción de rotación de soja con maíz y girasol permite unos mejores rendimientos de grano por hectárea. Son commodities que se exportan y ayudan a incrementar la oferta global de aceite y alimentos para el ganado”.¹³² Este argumento, junto con el de la contribución a la creación de empleo y crecimiento económico y la transferencia de tecnología hacia los pequeños productores, sirven para justificar el apoyo financiero de la CFI a las operaciones de DAP.

El impacto de las operaciones de esta empresa sobre la seguridad alimentaria nacional y local, sin embargo, no parece haberse tenido en cuenta en esta valoración. Los monocultivos industriales compiten por recursos como la tierra, el agua, el capital y la fuerza de trabajo. De hecho, Paraguay ha incrementado su dependencia de las importaciones de alimentos, mientras cada año dedica más tierras productivas a la agroexportación.

En 2009 la CFI evaluó el desempeño social y ambiental de DAP, concluyendo que cumplía adecuadamente con la mayoría de los estándares e identificando algunas áreas de mejora que quedaron plasmadas en un Plan de Acción Ambiental y Social.¹³³ El proyecto se clasificó como categoría B según la Política de Sostenibilidad Social y Ambiental de la CFI, lo que significa que los impactos podían ser mitigados o evitados aplicando las buenas prácticas internacionales, los estándares de desempeño de la CFI y las directrices específicas del Banco Mundial sobre medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo. El caso de DAP es presentado por la CFI como un “modelo de implementación eficaz de las mejores prácticas de agricultura sostenible”.

En esta valoración influyó muy positivamente la puesta en marcha de proyectos comunitarios a través de fundaciones como Moisés Bertoni. El grado de éxito o fracaso de estos proyectos, sin embargo, no fue evaluado por la CFI al tratarse de iniciativas adicionales a los estándares exigidos y no estar financiadas por este organismo. De forma similar, se evalúa positivamente la existencia de un mecanismo de atención de quejas con las comunidades, sin medir cuántas veces se ha utilizado este mecanismo o si ha resultado eficaz en la resolución de los conflictos.

Cerca de 80 bancos internacionales aplican los mismos estándares de desempeño que la CFI. Cuando el Banco Mundial aprueba la financiación de un proyecto a una entidad, de alguna forma actúa como un sello de garantía ante otros inversores potenciales, pues consideran que las evaluaciones que realiza la CFI son muy exhaustivas. Cabría preguntarse, sin embargo, en qué medida esto fue así en este caso particular, dados los hallazgos que se presentan en las siguientes secciones.

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista a Edgar Restrepo, responsable de la CFI en Paraguay, el 22 de febrero de 2013, y en documentos disponibles en el sitio web <http://www.ifc.org>

EL MODELO DE NEGOCIO DE DAP

DAP, junto con sus empresas socias, se dedica a adquirir estancias ganaderas, que la empresa califica como “pastura degradada” o tierras “sub-utilizadas”, para transformarlas en explotaciones agroindustriales. De esta forma, con la conversión en plantaciones mecanizadas se revaloriza el valor de la tierra de forma significativa. La otra línea de negocio es la

producción y comercialización de materias primas agrícolas (principalmente soja, maíz y en menor medida girasol) para el mercado exportador.

Con el fin de atraer a inversores potenciales, DAP ofrece entre un 5% y un 10% de rentabilidad anual de la inversión y una apreciación del valor de la tierra del 10-15%.¹³⁴ La estrategia de la empresa se ha basado en una fuerte presencia territorial. En los primeros años llegó a adquirir 25.000 hectáreas en propiedad y 10.000 en alquiler en varios departamentos, para cultivar soja, maíz y girasol.¹³⁵ Tras la venta de algunas fincas,¹³⁶ actualmente dispone de 11.350 hectáreas en propiedad en el departamento de San Pedro (ver listado de fincas en la Tabla 6 y mapa en la Figura 4) así como aproximadamente 7.000 hectáreas alquiladas en otros departamentos. Todas las propiedades adquiridas por DAP se destinaban anteriormente a la ganadería, pues una de sus políticas consiste en no comprar fincas inferiores a cien hectáreas.

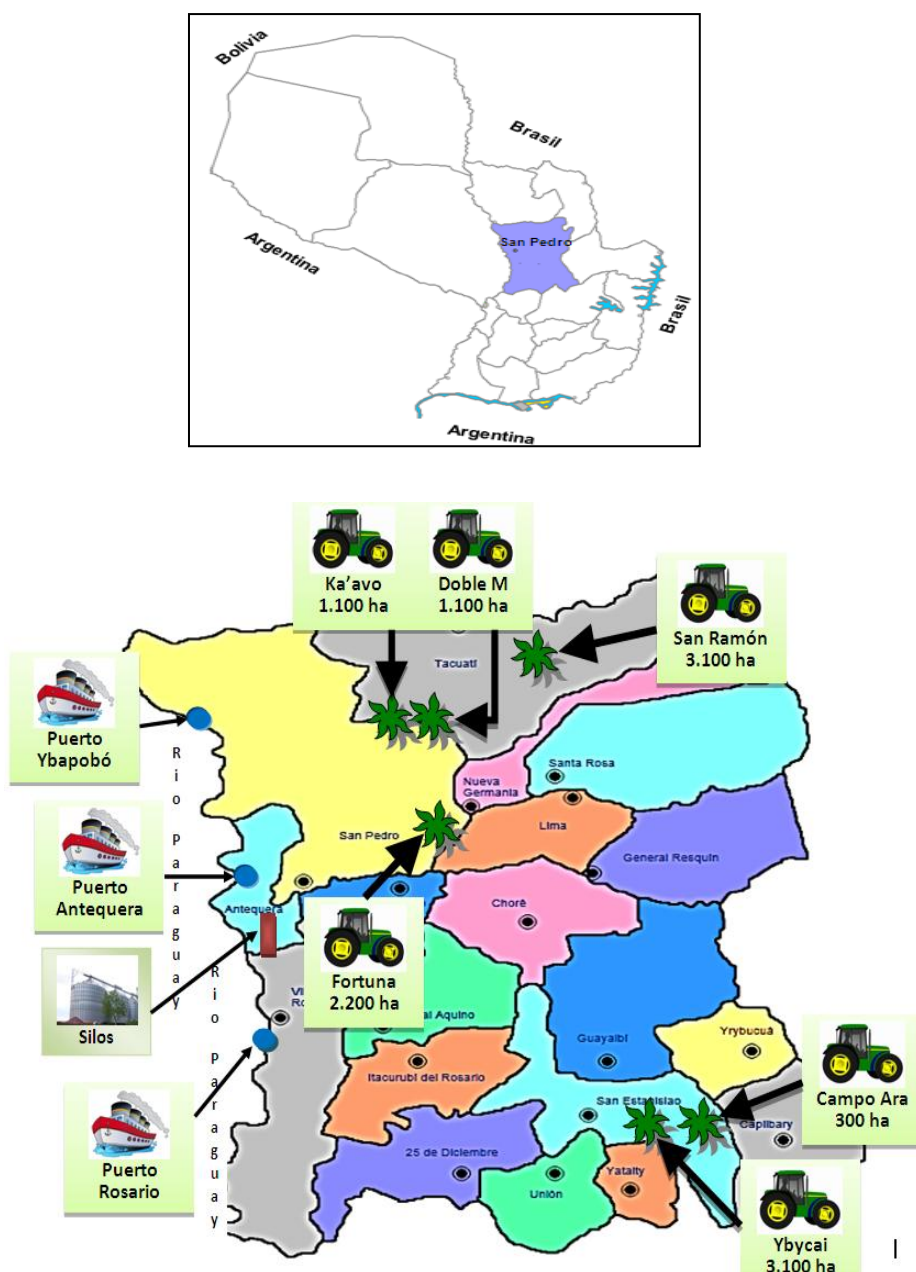
Tabla 6. Propiedades de DAP en Paraguay

Finca	Departamento	Distrito	Superficie (ha)	Comunidades vecinas
<i>Fortuna</i>	San Pedro	Nueva Germania	2.200	Colonia Barbero, Potrero Naranjo, Asentamiento 12 de junio
<i>Doble M y Ka'avo</i>	San Pedro	Tacuatí	2.200	No hay
<i>San Ramón</i>	San Pedro	Tacuatí	3.100	No hay
<i>Yvycai</i>	San Pedro	San Estanislao	3.400	Calle 6000, Calle 12000, Cañada Santa Rosa
<i>Campo Ara</i>	San Pedro	San Estanislao	300	4000 Fondo

Fuente: Guillermo Terol, Gerente socio-ambiental de DAP. Comunicación personal

El departamento de San Pedro es eminentemente rural y, junto con los de Caazapá y Caaguazú, uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento del cultivo de soja, que en 2011 ya ocupaba el 15% de su territorio.¹³⁷ En el proceso de expansión de la frontera agrícola se calcula que entre 1986 y 2008 se deforestaron sólo en este departamento más de 500.000 hectáreas (cerca de un 30% de su superficie total).¹³⁸ Al mismo tiempo, es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza extrema y un alto nivel de conflictividad por la tierra, que se han visto agravados en los últimos cinco años por la expansión de la soja. La penetración de este cultivo se produce sobre todo en los distritos colindantes con los departamentos de la cuenca del Río Paraná (Alto Paraná, Amambay, Canindeyú e Itapuá), primero mediante la compra de estancias ganaderas y su transformación en plantaciones y posteriormente con el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas. Más de la mitad de las explotaciones agropecuarias carecen de título legal de propiedad.

Figura 4. Mapa de localización de las propiedades de DAP en el departamento de San Pedro



En las operaciones agrícolas se aplica el sistema habitual en un *pool de siembra*,¹³⁹ que consiste en contratar externamente todos los servicios de siembra, fertilización, fumigación, cosecha, almacenamiento y transporte. Los principales compradores de la producción son las transnacionales Noble, Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus, quienes a su vez exportan a China y Europa desde Argentina. Dentro de la finca Campo Ara la empresa dispone de una parcela de 130 hectáreas de cultivo orgánico de soja, que desde hace cuatro años cuenta con la certificación del Institute for Marketecology (IMO)¹⁴⁰.

ESTRATEGIA CON LAS COMUNIDADES: DE LA RESISTENCIA A LA BENEFICENCIA

DAP ha sido una de las primeras empresas que operan en Paraguay en adherirse a los principios de responsabilidad social empresarial, y asegura contar con un triple balance de resultados que no sólo mide la rentabilidad a largo plazo sino también el respeto ambiental y la inclusión social de sus acciones. Con el fin de “mantener una convivencia armónica con la población local”¹⁴¹ ha promovido “la generación de relaciones de confianza y apoyo a las comunidades vecinas a las fincas”.¹⁴² Gracias a estas acciones, según el informe de High Quest Partners, DAP es una de las pocas empresas sojeras que operan en Paraguay que no ha sufrido ocupaciones en sus fincas.¹⁴³

Desde su inicio, los accionistas paraguayos que fundaron DAP trataron de diferenciarse de los empresarios sojeros brasileños y evitaron el conflicto con la población local. Su estrategia ha consistido en destinar una parte de la inversión a la protección ambiental y la relación con las comunidades. Como reconoce la propia empresa,¹⁴⁴ esto resulta conveniente para el negocio pues otros inversores que llegaron a San Pedro con el mismo modelo aplicado por los brasileños en el Alto Paraná (ignorando a la población local) se han enfrentado a una resistencia tan fuerte que no han podido llevar adelante sus operaciones, y las comunidades vecinas han exigido al Gobierno la expropiación de las fincas sojeras.¹⁴⁵ En el mismo sentido se expresó la Sociedad de Estudios Rurales (SER), una organización con amplia experiencia en asistencia técnica y organizativa a organizaciones campesinas que llevó a cabo proyectos comunitarios con DAP: “no hubo resistencia porque nosotros estábamos trabajando con ellos; en ese sentido la empresa fue muy inteligente pues a otros como Teixeira los campesinos no los van a dejar trabajar y le van a terminar quitando su tierra”.¹⁴⁶

Hasta ahora DAP ha trabajado con las siguientes organizaciones:

- la Fundación Moisés Bertoni en proyectos productivos y sociales;
- el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), con asesoría para el cumplimiento de la legislación ambiental y el desarrollo de una propuesta de pago por servicios ambientales;
- la Sociedad de Estudios Rurales (SER) en proyectos productivos.

Las acciones de tipo filantrópico han sido muy diversas, dependiendo de las comunidades y basadas en la demanda. De esta forma, DAP ha atendido solicitudes tan diversas como servicios de atención médica, útiles escolares, material para la reparación o construcción de iglesias, bombas de pozos, semillas para huertos familiares, animales menores, alambre para cercados, etc. Este tipo de acciones se ha dado sobre todo en las comunidades más pequeñas y con menor nivel organizativo, mientras que en las mejor organizadas se impulsaron proyectos productivos. En ciertos lugares DAP también concedió becas a hijos de las familias campesinas para que pudiesen recibir formación agrícola.

El nivel de relación ha sido muy distinto entre unas comunidades y otras. Por ejemplo, los pequeños asentamientos campesinos –de menos de 50 familias– vecinos a la finca Ybycai como Calle 12000, Calle 8000, Calle 10000 o Cañada Santa Rosa han recibido considerablemente menos apoyo de DAP. Un vecino de Cañada Santa Rosa relata cómo “la Fundación Moisés Bertoni venía a darnos semillas para huertas y nos daban asistencia técnica a veces. No nos daban semilla para maíz, sólo para hortalizas. No hicieron preparación del terreno. Hace dos años nos trajeron pollitos y otros animales menores y nos daban algunos alambres para el cercado. Esa fue toda la ayuda que recibimos.”¹⁴⁷ Al comparar con otros empresarios sojeros, una mujer comenta que “ellos [DAP] no dan ningún apoyo a las escuelas ni al centro de salud, son muy miserables, los menonitas sí ayudan a las escuelas o cuando hay gente enferma, son mejores personas.”¹⁴⁸

Otra forma de ayuda consiste en que cuando se cosecha el maíz la empresa permite que los vecinos entren a recoger los granos que caen de la cosechadora. Aunque la empresa trata de restringir el acceso a sus fincas para evitar accidentes, le resulta muy difícil impedirlo y a veces reciben solicitudes de la escuela para que permitan el acceso a los niños para recoger el maíz cuando van a celebrar alguna actividad.¹⁴⁹ Un vecino de Calle 10.000 describe cómo “todo el mundo va a recoger el maíz que cae cuando es temporada, y viene gente de otros lugares para llevarlo en carreta. El año pasado la única ayuda que recibimos fue esa.”¹⁵⁰

Este tipo de relación de cierta dependencia de la empresa perpetúa en alguna medida la relación que se establecía tradicionalmente con los propietarios de las estancias ganaderas. Ante la ausencia del Estado, la población local tiene la expectativa de que los empresarios que se instalan en la zona contribuyan con la satisfacción de algunas de sus necesidades básicas y cubran, al menos en parte, el vacío de inversión en el medio rural.

DAP, sin embargo, optó por trascender este papel asistencial y emprendió iniciativas comunitarias con fines productivos para la generación de ingresos. El siguiente apartado analiza el desarrollo y los logros de los proyectos de carácter productivo.

PROYECTOS PRODUCTIVOS: CRÓNICA DE UN FRACASO

Como parte de sus acciones en materia de responsabilidad social, DAP propuso a las comunidades de Colonia Barbero, 12 de Junio y Agüerito la puesta en marcha de proyectos de intensificación productiva a través de organizaciones con las que establecía convenios y en ocasiones obtenía financiación por parte de organizaciones de desarrollo. Un buen número de familias campesinas se incorporó a estos proyectos con la expectativa de mejorar sus ingresos y aliviarse del trabajo manual gracias a la mecanización. Más de cinco años después ha sido posible contrastar los resultados obtenidos en el terreno. Si bien las limitaciones del estudio impidieron realizar una evaluación exhaustiva de los proyectos, los testimonios recopilados, muy consistentes entre sí, permiten reconstruir lo sucedido, valorar los alcances y extraer algunos aprendizajes.

La trampa de la deuda en Colonia Barbero

En 2006 DAP compró la finca Fortuna (de 2.200 hectáreas) en el distrito de Nueva Germania (departamento de San Pedro) a un propietario ganadero. Desde el inicio los vecinos de Colonia Barbero mostraron su oposición al cultivo intensivo de soja por los riesgos para la salud, el medio ambiente y su modo de vida campesino, y expresaron su disconformidad con el estudio de impacto ambiental. Instalaron un campamento a la entrada de la finca y realizaron manifestaciones en la capital del departamento. Sin embargo, no lograron detener la inversión pues DAP contaba con el apoyo de los Gobiernos local y estatal y disponía de los permisos necesarios.¹⁵¹

En 2008, una vez que la finca Fortuna estaba en producción, DAP se acercó a las familias ofreciéndoles ayuda para mecanizar sus tierras y adoptar prácticas de cultivo tecnificadas que les ayudarían a mejorar sus condiciones de vida. Entonces se puso en marcha un proyecto a tres años financiado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)¹⁵² e implementado por la Fundación Moisés Bertoni (FMB) para cultivar maíz principalmente, y frijol y girasol en algunas parcelas (no se aconsejaba el cultivo de soja). El propietario debía aportar el terreno y prepararlo para la mecanización, DAP financiaría las tareas mecanizadas y el suministro de semillas y agroquímicos (a través de contratistas) y posteriormente estos costes se descontarían de la cosecha.¹⁵³ Era una forma de reproducir a pequeña escala el modelo de plantación que lleva a cabo DAP en sus propias fincas, pues todas las operaciones eran realizadas por terceros.

El primer año comenzó con 20 familias que produjeron maíz, y gracias al buen resultado la mayoría pudo devolver la inversión. Entonces llegaron a unirse más de cien familias al proyecto, atraídas por el éxito de sus vecinos y se creó la Asociación de Productores de Siembra Directa para manejar un fondo rotatorio con el que más familias pudieran incorporarse al sistema. En 2009 se llegaron a tener en producción 200 hectáreas de maíz. Pero el clima desfavorable y los problemas con el manejo del cultivo hundieron la producción en 2010. Ese año la mayoría de las familias fueron incapaces de devolver el dinero al fondo rotatorio, con lo que éste quedó con una deuda de 200 millones de guaraníes (unos 50.000 dólares).¹⁵⁴

Según los entrevistados, uno de los mayores problemas que se dio en 2010 fueron los retrasos en las labores de siembra y cosecha. Ese año DAP no ayudó a gestionar la maquinaria, como había hecho el primer año, y al tratarse de parcelas pequeñas no resultaban interesantes para los contratistas que brindan el servicio de mecanización, quienes dan prioridad a las fincas grandes. Por otro lado, muchos productores no tenían ningún control sobre el precio asignado a su producción, ni siquiera sobre el volumen producido, ya que la Fundación Moisés Bertoni se ocupaba de gestionar todo y al final les entregaba las cuentas. Tal y como describió el sistema un campesino de Colonia Barbero, “tú ponías tu tierra y ellos manejaban todo, las máquinas y todo. Luego les preguntabas si ganaste algo y decían que no.”¹⁵⁵

Cuando el fondo rotatorio quebró, DAP ayudó a gestionar créditos con Visión Banco¹⁵⁶ a una tasa de interés del 16% (inferior a las tasas de mercado). En lugar de recurrir a instituciones financieras estatales como el Banco Nacional de Fomento, se optó por este banco privado, a quien le interesaba mejorar su calificación de banco social porque estaba siendo acusado de no trabajar con los estratos más pobres.¹⁵⁷ Entonces 120 familias asumieron créditos con Visión Banco de hasta 12 millones de guaraníes (3.000 dólares). También se adquirieron créditos de otras entidades financieras como Banco Atlas o Financiera El Comercio, entre otras. Muchas de las familias nunca fueron capaces de devolverlos y ahora figuran en la lista nacional de deudores morosos de Inforcom.¹⁵⁸

Según los testimonios obtenidos en Colonia Barbero, **de las aproximadamente 120 familias que participaron en el proyecto todavía mantienen deudas unas 45**. Muchas de ellas piensan que alquilar sus tierras habría sido una opción mucho mejor. Las familias entrevistadas han abandonado la producción mecanizada, pues no pueden costearla. Algunas han vuelto a producir en la forma en que lo hacían anteriormente y se esfuerzan por recuperarse de las deudas contraídas.

El Cuadro 4 recopila algunos testimonios que muestran la situación en que se encuentran hoy los campesinos y campesinas que participaron en los proyectos promovidos por DAP y la Fundación Moisés Bertoni en Colonia Barbero.

Cuadro 4. Cuando el fruto del trabajo son deudas

Plantamos cuatro hectáreas pero ellos [la Fundación Moisés Bertoni] llevaron toda la cosecha. Mostraron los papeles y no hubo ganancia. Destroncamos a mano las cuatro hectáreas. Vinieron y sembraron y tuvimos un gasto de 7,5 millones de guaraníes [casi 2.000 dólares], llevaron el maíz y cobraron todo lo que pusieron. Quedamos al costo, no ganamos nada. En la parte mecanizada quedó la tierra dura y ya no se puede trabajar. Quizá habría convenido más alquilar esas cuatro hectáreas que trabajar con ellos en sociedad.

Familia campesina de Colonia Barbero, participante en grupo focal el 15 de febrero de 2013.

Nosotros destroncamos sin ayuda diez hectáreas. Antes en esa tierra teníamos pasto, maíz, mandioca, caña de azúcar, de todo teníamos... Gastamos mucho dinero y tuvimos que vender la vaca. Después nos dijeron que no salió el maíz como esperaban. La semilla tiene un coste, la siembra, fumigar y la cosecha. No pagamos todo con el grano, que lo llevaron a 200 guaraníes el kilo. Entonces dijeron que iban a sembrar girasol y con eso íbamos a compensar y que iba a sobrar algo para nosotros. Pero el girasol no salió. Y luego propusieron sembrar frijol. La helada casi destruyó la primera cosecha de frijol. La segunda cosecha se la llevaron ellos. A nosotros no nos pagaron nada porque no cubrieron el coste de producción. Quedamos debiendo cinco millones. No nos dimos cuenta, éramos ignorantes porque ellos se adueñaron de nuestra chacra. Después del frijol volvieron a sembrar maíz. Y seguimos en esa rotación durante tres años. Alguien nos dijo que teníamos que salir porque esta cadena iba a seguir y que íbamos a terminar en Inforcom. Ahora tenemos seis millones de deuda con Banco Visión [unos 1.500 dólares]. Otros deben 10 o 12 millones o están embargados. A nosotros aún no nos han embargado porque pagamos los intereses.

Fueron tres años de sufrimiento. Nos sacaron foto para un informe con el maíz en el mejor momento, cuando estaba más verde. Sacaban la foto y la llevaban a los Estados Unidos como informe y así venían los créditos. Ellos dicen que salió bien y que ayudaron a la gente... Ahora les prohibí que sigan sacando fotos para tener crédito internacional que no nos llega a nosotros. Ese crédito no lo recibimos, la empresa se lo quedó y a nosotros nos metió en Visión Banco. Y todos los que recibieron crédito de Visión Banco están ahora en Inforcom.

Familia campesina de Colonia Barbero, participante en un grupo focal el 15 de febrero de 2013.

El endeudamiento y la ausencia de protección frente al riesgo significaron para muchas familias la pérdida de activos productivos y un mayor empobrecimiento. En el Cuadro 5 uno de los integrantes de la Asociación de Productores de Siembra Directa de Colonia Barbero describe esta situación.

Cuadro 5. Expectativas frustradas

Yo tenía información sobre la soja, que se cultivaba en todo Paraguay y pensé, ¿por qué no acá? Mucha gente estaba en contra pero yo no tenía miedo. Tengo 13 hectáreas, y mecanicé ocho y media. Antes de mecanizar cultivaba cuatro hectáreas de cedrón orgánico con la cooperativa. Tenía mucho trabajo y daba empleo. Aunque no era muy rentable, se vivía bien y daba de comer a los vecinos porque contrataba hasta 12 personas. También llevaba el cedrón a limpiar a las casas con mi carro y mi buey. Estaba bien esa época, entonces yo estaba mejor. Tenía dos yuntas de bueyes, un carro, un arado, 13 vacas y un toro... pero lo tuve que vender todo. Eso fue antes de trabajar con DAP.

En mi caso ya no puedo sembrar nada porque me quedé sin plata. Debemos todo nosotros. Perdimos el fondo rotatorio y para sembrar por nuestra cuenta pedimos crédito a Visión Banco en 2010. Yo estoy en Inforcom porque hice de aval para otra persona. Tengo una deuda de 2,7 millones de guaraníes [unos 675 dólares]. Todos los que entramos en este grupo debemos, y en 12 de Junio [un asentamiento cercano, ver caso más adelante] también deben y están refinanciando, refinanciando y refinanciando.

Ellos nos dijeron que los vecinos iban a vivir todos bien y no fue así. Nosotros vamos de mal en peor. El apoyo [de DAP] era para el inicio nada más.

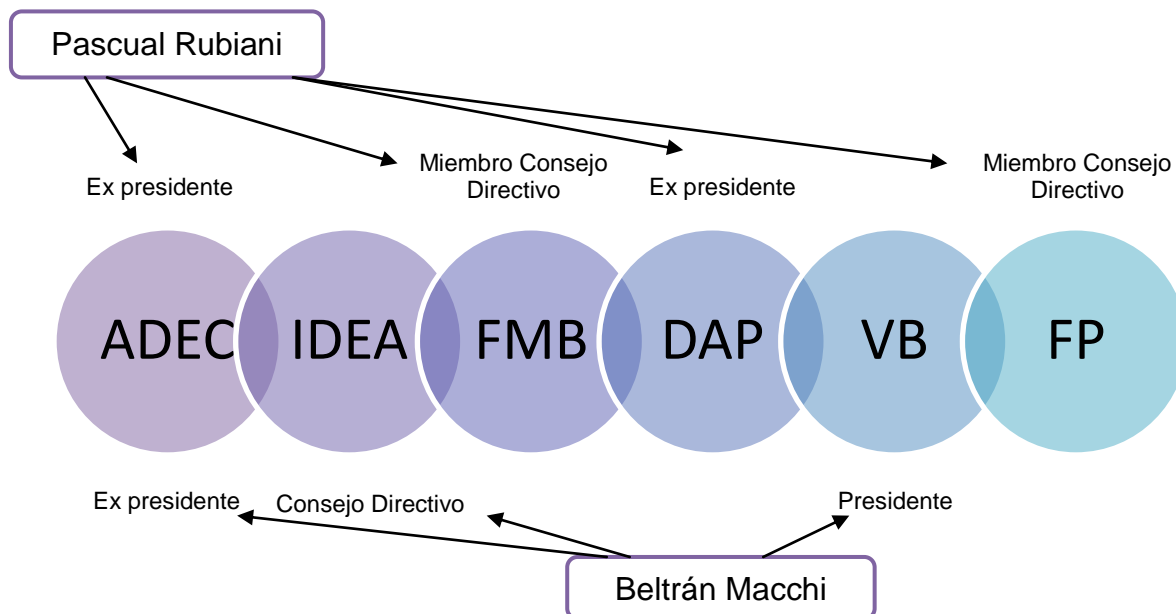
Ahora estoy pensando en alquilar mi chacra al gerente de Visión Banco porque ya no tengo plata para financiar mi cultivo. Pero él quiere mucha superficie, así que estoy pensando en juntar 12 hectáreas con mi vecino para alquílarselas. Y después voy a buscar trabajo de contratista con DAP.

Integrante de la Asociación de Productores de Siembra Directa de Colonia Barbero, entrevistado el 15 de febrero de 2013.

No en todas las comunidades, sin embargo, se emprendieron este tipo de proyectos. En algunas se negaron, como en San Pedro Poty, donde una de las vecinas describió cómo “le dije a un ingeniero que no nos podían obligar a endeudarnos y también le dije que nuestra tierra es pequeña para mecanizar, porque la soja no es negocio en pequeño; desde aquella vez no llegué más a mi casa”.¹⁵⁹

El hecho de haber involucrado a una institución financiera privada como Visión Banco en lugar de un ente público impuso unas condiciones crediticias más desfavorables para las familias campesinas. Si bien las tasas de interés fueron similares o incluso inferiores, los programas estatales dirigidos al sector campesino, como el Crédito Agrícola de Habilitación¹⁶⁰ entre otros, ofrecen la posibilidad de renegociar la deuda, que incluso en algunas ocasiones se ha llegado a condonar. La banca privada sin embargo es inflexible en caso de impago de la deuda y las consecuencias para el pequeño productor pueden ser devastadoras, como se ha observado en Colonia Barbero y 12 de Junio. Por otro lado, los programas crediticios estatales suelen ir acompañados de otros servicios para asegurar la viabilidad de la inversión y la devolución del préstamo, tales como asistencia técnica, provisión de insumos y apoyo en la industrialización o la comercialización. Resulta interesante observar las relaciones entre DAP y el resto de instituciones que participaron en la gestión de los proyectos y la concesión de financiación a los pequeños productores (ver Figura 5). Pascual Rubiani, expresidente de DAP y también de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) es además miembro del consejo directivo de la Fundación Moisés Bertoni (FMB) y de la Fundación Paraguaya (FP), que también concede créditos. Por su parte, Beltrán Macchi, presidente de Visión Banco (VB) también fue presidente de ADEC y es miembro del consejo directivo de IDEA, otra de las organizaciones que ha trabajado con DAP.

Figura 5. Relaciones en las directivas de DAP y Visión Banco



Fuente: Elaborado por Quintín Riquelme a partir de información disponible en Internet.

Asentamiento 12 de Junio: cuando los vecinos cultivan soja los problemas crecen

En el asentamiento 12 de Junio algunos pequeños productores estaban muy interesados en el cultivo de soja y ellos mismos buscaron el apoyo de DAP y la Fundación Moisés Bertoni para mecanizar sus tierras y desarrollar el cultivo. En este caso también USAID financió parte del proyecto, y en 2010 se formó un comité al que hoy pertenecen 50 de las 120 familias, con cinco hectáreas en promedio cada una. Se trabajó de forma similar a Colonia Barbero, pues en un inicio DAP adelantaba la financiación para el cultivo de maíz y soja orgánica a través de un fondo rotatorio. Posteriormente el comité tuvo que solicitar un crédito a Visión Banco y actualmente tiene una deuda con esta entidad que asciende a 70 millones de guaraníes (unos 17.500 dólares).¹⁶¹

El cultivo de soja ha provocado el descontento entre el resto de vecinos, quienes se quejan por la aplicación de pesticidas. Teóricamente, la producción de soja es orgánica, y el comité de productores cuenta con certificación por parte del Institute for Marketecology (IMO), la misma certificadora de la plantación de DAP en Campo Ará. Sin embargo, uno de los miembros del comité mostró al equipo investigador dos productos que aplica y que no están permitidos en la agricultura orgánica: un gramicida sistémico y un fertilizante químico foliar.¹⁶²

Si bien la mayoría de los vecinos se opone al cultivo de soja por la intensa aplicación de agroquímicos, el Cuadro 6 refleja un punto de vista distinto de un pequeño productor de soja del asentamiento 12 de Junio que restó importancia a los riesgos para la salud.

Cuadro 6. Copiar lo que hacen otros

Ahora tenemos 23 hectáreas de soja [convencional, no orgánica] con la familia, y nos está asustando la sequía. Yo sembré demasiado tarde, porque tardé en preparar el terreno. Varios de mis hijos tienen tierra y otros no tienen, necesito más tierra. Tener tierra es lo que vale ahora. Porque si ahora me ofrecen 20 millones de guaraníes no voy a vender mi tierra, al contrario estoy queriendo agarrar más. Le quiero comprar a mis compañeros campesinos que no quieren trabajar su tierra.

Un menonita viene a mecanizar y lleva cien millones de acá, hay que pagarle por plantación, fumigación, cosecha, el flete y el veneno [el agroquímico]. Por eso yo quiero un tractor para que ese dinero se quede acá.

Ahora la gente tiene miedo del veneno y yo no sé por qué. Yo copio lo que hacen los menonitas. Ellos acá tienen su casa, su chacra y sus animales. Aplican veneno al cultivo, sus animales comen ahí y no les pasa nada. Este veneno es sólo para gusanos y para el “yuyo” [las malas hierbas]. Hace 30 años que vivo acá y nunca me afectó nada. Cuando se trabajaba antes el algodón fumigábamos y no le hacía mal a la gente.

Pequeño productor de soja del asentamiento 12 de Junio. Entrevista el 16 de febrero de 2013.

Fracaso productivo y una comunidad dividida: el caso de Agüerito

En la colonia de Agüerito viven 180 familias en 3.000 hectáreas que el Estado les entregó en 1992 tras dos años de ocupaciones, desalojos y huelgas de hambre. El nivel organizativo es muy superior al de otros asentamientos y muy volcado en la lucha por la tierra. De hecho, algunos de sus dirigentes participaron en la conformación de la Liga Nacional de Carperos.¹⁶³ Cerca de Agüerito se encuentra la finca de Teixeira (un propietario brasileño) de 22.000 hectáreas, sobre la que los pobladores de Agüerito han ejercido una intensa presión para que sea expropiada. La finca La Esperanza de DAP, sin embargo, se encuentra a más de 25 kilómetros y existen otras comunidades más cercanas como Karapa'í y Piray. Aún así, la empresa tenía interés en mantener buenas relaciones con Agüerito.

En 2008 la Sociedad de Estudios Rurales (SER) fue contratada por DAP para llevar a cabo con los vecinos y vecinas de Agüerito una propuesta de trabajo social y productivo. Al comienzo se invirtió en actividades educativas y de salud, una radio comunitaria e internet para la escuela. En 2009 DAP, la Asociación Campesina de Agüerito y SER firmaron un convenio a tres años con el fin de crear una empresa mixta para gestionar conjuntamente una parcela comunitaria de unas 200 hectáreas, 130 de las cuales se mecanizaron para la producción de soja y maíz no transgénicos. También se apoyó a las familias para impulsar el cultivo de maíz, sésamo y chíca orgánicos que se comercializarían a través de la empresa Ecotrading Yba Py.¹⁶⁴ En ese proyecto llegaron a participar 140 familias que producían de forma mixta (tanto colectiva como individual). El sistema, como en los casos anteriores, consistía en que las familias aportaban la tierra, SER la asistencia técnica y organizativa y DAP adelantaba la inversión (para la preparación del terreno, la compra de semillas, insecticidas, etc.) y posteriormente se descontaba de la producción.

Después de dos años, la empresa mixta tuvo un saldo negativo de 95.000 dólares, asumido hasta la fecha por DAP.¹⁶⁵ A raíz del descalabro económico y problemas de liderazgo se produjo un conflicto interno y SER dejó de trabajar con la comunidad en 2011, cancelándose también el convenio que existía con Ecotrading para la comercialización. Existen dos versiones sobre lo que sucedió. Por un lado, quienes culpan a los directivos de la Asociación Campesina de Agüerito por la mala gestión del proyecto crearon el Consejo de Desarrollo Comunitario y asumieron la producción de soja en la parcela colectiva. Y por otro, la Asociación Campesina

de Agüerito achaca las pérdidas a las malas cosechas. Ninguno de ellos señala a SER ni a DAP como responsables del fracaso.¹⁶⁶

Actualmente algunas familias vinculadas al Consejo de Desarrollo Comunitario han comenzado de forma independiente en la producción de soja convencional en la parcela colectiva que se mecanizó con el proyecto. Con los beneficios que obtengan esperan saldar la deuda con DAP, si bien la empresa de momento no ha actuado judicialmente para exigir el cobro de la deuda.

UN COSTOSO APRENDIZAJE

Después de cinco años trabajando con estas comunidades, DAP ha realizado una pausa de un año en la que no ha desarrollado más proyectos comunitarios y se ha dedicado a “estudiar los aprendizajes” extraídos de estas experiencias.¹⁶⁷ El coste de este aprendizaje ha sido muy alto, y en gran medida ha recaído sobre las familias campesinas que se involucraron en los proyectos. Muchas de ellas, después de invertir sus recursos propios y años de trabajo, han quedado endeudadas con las entidades financieras o con la propia DAP.

El modo de trabajar con las comunidades consistía en reproducir las prácticas de cultivo aplicadas por DAP en sus plantaciones: uso intensivo de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas y plaguicidas) y la contratación externa de los servicios de mecanización para todas las labores. Es decir, un esquema **altamente dependiente de capital**. En ausencia de éste, las familias tuvieron que recurrir al endeudamiento, primero con la empresa y después con entidades financieras privadas. A diferencia de DAP, las familias campesinas carecen de financiación a largo plazo (que DAP sí tiene gracias al crédito de la CFI) y de seguro agrícola, por lo que están totalmente expuestas a pérdida de cosechas por la sequía y otras inclemencias climáticas. Por otro lado, el pequeño tamaño de las explotaciones familiares y por tanto del volumen de producción dificulta la comercialización y la realización a tiempo de las labores de cultivo, pues los contratistas que brindan servicios de mecanización (de quienes dependen para la siembra, la cosecha y la aplicación de plaguicidas) dan prioridad a explotaciones más grandes.

A pesar de que fue DAP, junto con la FMB y SER como intermediarias, quien promovió la mecanización y la adopción de un modelo tecnificado, ahora reconoce que “no es la panacea y que el modelo del agronegocio no funciona con los pequeños propietarios”.¹⁶⁸ El principal problema es que la forma en que se diseñaron los proyectos hizo que **prácticamente todo el riesgo de la inversión recayese sobre las familias campesinas**, cuando una de las características del sector campesino es precisamente su baja capacidad de absorber los riesgos. Hoy resulta evidente que la transferencia del modelo fracasó. No obstante, tuvo algún resultado transitoriamente, mientras se mantuvo la asistencia técnica (o más correctamente la dirección de las operaciones de cultivo por parte de la fundación) y se aseguraba que todas las operaciones se realizasen a tiempo, y cuando las condiciones climáticas fueron favorables. Pero con un año de malas cosechas y una vez que se retiró el apoyo de DAP, las familias entraron en una espiral de deuda sin salida posible.

Tras revisar las experiencias anteriores, DAP ha llegado a la conclusión de que la mejor alternativa posible para las familias campesinas es la producción orgánica, principalmente por el menor riesgo asociado ya que no es tan dependiente de insumos externos y no es necesario endeudarse para producir. Solamente para cubrir los costes en la producción de soja convencional es necesario alcanzar una productividad de al menos mil kilogramos por hectárea. Con el fin de promover un modelo de producción orgánica, DAP estaría dispuesta a invertir en los procesos de certificación y colaborar con los productores en la búsqueda de nuevos mercados.¹⁶⁹

Este modelo de producción pareciera en principio más apropiado para la pequeña producción. Sin embargo, son varias las preguntas que surgen ante este cambio de rumbo. Si no se modifica la situación de vulnerabilidad de estos productores frente al clima, las barreras en el

acceso al mercado o la ausencia de financiación estable y de largo plazo, ¿es posible lograr su sostenibilidad económica con este cambio en el modelo productivo, sobre todo cuando muchas de las familias parten de una situación de endeudamiento? Por otro lado, ¿es viable producir de forma orgánica en la proximidad de plantaciones de soja transgénica, y en las fincas que ya fueron mecanizadas y recibieron aplicaciones intensas de agroquímicos? Y sobre todo, ¿quién asumirá el riesgo en esta ocasión?

IMPACTOS DE LAS OPERACIONES DE DAP

Daños al medio ambiente y la salud

Vivir cerca de una plantación intensiva de soja, maíz y girasol significa estar permanentemente expuesto a las aplicaciones de plaguicidas y herbicidas, pues el cultivo no cesa en ningún momento. En todas las comunidades visitadas cercanas a las plantaciones, las familias expresaron su angustia e impotencia frente a problemas de salud muy similares. La presencia continua del “veneno” es descrita con estas palabras por una mujer que vive en las cercanías de la plantación Ybicai: “Vengan de madrugada. De madrugada se siente con el viento. Todo ese olor. Día y noche trabajan los tractores cuando el tiempo está bien.”¹⁷⁰

Las afecciones más frecuentemente mencionadas fueron las respiratorias, los daños en la piel, los dolores de cabeza y de estómago. El riesgo es especialmente grave para las mujeres embarazadas y los niños. Otro vecino relató cómo “hace un año cuando estaban fumigando pasó una señora embarazada por la ruta. Llegó a su casa con malestar y perdió a su bebé. Se había ido a hacer su control y venía por este camino justo cuando fumigaban y cuando llegó a su casa lo perdió.”¹⁷¹

Tanto el hospital distrital de San Estanislao como el responsable del centro de salud que atiende a Colonia Barbero confirmaron que en los últimos años han aumentado significativamente las afecciones respiratorias, las alergias y el asma. Han observado que las consultas por problemas respiratorios se disparan justo después de la cosecha de maíz, posiblemente debido al polvo y a que muchas personas acuden a recoger el grano que cae de las máquinas cosechadoras. Los camiones que circulan con enorme frecuencia durante la época de cosecha (coincidente con la época seca) provocan nubes de polvo que afectan sobre todo a las viviendas cercanas a los caminos.¹⁷² Se han detectado casos de pacientes de 40 o 50 años que desarrollan asma por primera vez, algo que antes sólo se observaba a edades tempranas. Por estar mal alimentadas, las personas que viven expuestas a la fumigación son más vulnerables pues resisten peor las agresiones ambientales. En cuanto a los casos de cáncer, si bien es más difícil asociarlos a la exposición a plaguicidas (pues existe un problema de falta de registro con relación al lugar de residencia del paciente¹⁷³) las personas entrevistadas mencionaron casos más frecuentes de leucemia, cáncer de hígado y de piel.

La persona que atiende uno de los puestos de salud lo resumió con estas palabras: “Mientras haya fumigación tan cerca de los lugares donde vive la gente va a haber problemas, de eso no hay duda. Porque es impresionante la cantidad de veneno que están derramando todos los días.”¹⁷⁴

Uno de los lugares donde se percibe de forma más severa la amenaza a la salud por la cercanía del cultivo de soja es Cañada Santa Rosa. Se trata de una comunidad formada por apenas 40 casas alineadas en una estrecha franja que a un lado colinda con una estancia ganadera (por el momento) y al otro con Ybycai, una propiedad de DAP de 5.000 hectáreas. El Cuadro 7 recoge lo que significa vivir junto a un sojal para una de las familias afectadas.

Cuadro 7. Lo que significa vivir junto a un sojal

La fumigación es lo que nos afecta mucho acá. Ellos no nos avisan cuando van a fumigar y si el viento está a favor o en contra, igual fumigan. Acá no tienen árboles como barrera protectora, sólo 70 metros de pasto acá en el frente. Cuando hay vientos nos afecta mucho. Fumigan mucho en el tiempo que siembran soja, pues con el maíz y el girasol fumigan mucho menos. Pero la soja la fumigan varias veces, y 15 días antes de la cosecha le pasan el secante. Yo denuncié aquella vez y vinieron esos del SENA. Desde entonces se acordó que sólo pueden fumigar a partir de 150 metros de la casa. Antes sembraban a partir del alambre, pero desde hace tres años, que yo denuncié porque me secaron la moringa [un arbusto medicinal] dejaron ese pasto enfrente. A partir de eso empezaron a cuidar un poco más y a tener en cuenta el viento para fumigar, pero desde hace seis meses han vuelto a fumigar con cualquier viento. Y cuando eso pasa nosotros nos escondemos todos del olor.

Antes nosotros acá, cuando no teníamos la barrera, les llegamos a disparar con escopeta porque no respetaban nada. A las embarazadas les sentaba muy mal y salíamos a perseguirlos con escopeta. A mí lo que me apena mucho es la contaminación. Todos los arroyos que pasan por acá están contaminados. Yo entré en el monte a buscar miel y vi el arroyo y noté que encima del agua había como grasa. La gente se baña ahí. Después de la lluvia el agua se queda toda oscura, y pasan quince días y se aclara para bañarse. Después de llover no hay que entrar al agua porque ahí es donde aparecen los granos. Para los arroyos dejan una pequeña franja de seguridad de árboles, pero cuando llueve no hay árbol que pueda atajar el veneno que se arrastra con el agua porque ahí arriba está todo pelado.

Familia de Cañada Santa Rosa, entrevistada el 18 de febrero de 2013.

Además de quienes viven junto a las plantaciones, los trabajadores agrícolas están también muy expuestos a los pesticidas pues carecen de protección adecuada, según la información recabada en comunidades como 4000 Fondo, vecina a la finca de Ybycai. Uno de los trabajadores temporales narró cómo “cuando estábamos trabajando en la carpida [eliminando las malas hierbas] fumigaron a cien metros y uno se enfermó y lo llevaron enfermo con dolor de estómago. A nosotros nos hizo doler un poco la cabeza pero no le hicimos caso y continuamos.”¹⁷⁵

La fauna también sufre intoxicación con el uso masivo de plaguicidas. Como describe otro vecino de la plantación Ybycai: “Acá el medio ambiente se fundió todo. Antes había muchísimas palomas y ahora no ves más. Armadillos tampoco. Lindos arroyos había en esta zona y ahora todos los arroyos están contaminados. El año pasado se encontraron muchos peces muertos en el río y le prohibimos ir a los niños. Dependemos muchísimo del medio ambiente y ahora todo eso se perdió.”¹⁷⁶

Si bien existe una normativa que establece medidas de protección en la aplicación de agroquímicos para las personas y comunidades vecinas a las plantaciones, a criterio de los analistas consultados resulta insuficiente para garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano.¹⁷⁷ En el caso de DAP, se da un mayor respeto a la legislación ambiental que en otras empresas del sector. Con el fin de prevenir la contaminación por la aplicación de agroquímicos, encarga análisis del agua al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización dos veces al año.¹⁷⁸ También ha establecido barreras de protección en los límites con núcleos de población. En el caso de la finca Ybycai, sin embargo, se observó una protección insuficiente en el camino vecinal que separa la plantación de las comunidades Calle 12.000 y Calle 10.000, y tanto ahí como en Cañada Santa Rosa la protección es únicamente pasto. Por otro lado, al trabajar por medio de contratistas resulta prácticamente imposible para la empresa garantizar que siempre se mantengan las buenas prácticas en la aplicación de plaguicidas, como en caso de fuertes vientos que arrastran el producto hacia las viviendas.

Impactos sobre los medios de vida

Las familias campesinas cultivan los alimentos para su propio consumo –maíz, poroto, mandioca– y otros cultivos de renta como sésamo y algodón. Muchas de ellas señalaron que la aplicación masiva de herbicidas provoca daños a sus cultivos y animales, mencionando muy a menudo pérdidas en los frutales y en los cultivos de mandioca y porotos (frijol), así como alta mortandad de gallinas. También indicaron que cuando se fumiga en las plantaciones las plagas se desplazan a sus chacras, donde observan una mayor presencia de chinches y escarabajos.

Cuadro 8. Algunos testimonios de los daños a la producción campesina

Yo crié 150 pollitos y sólo 30 sobrevivieron, a pesar de que yo les compraba para su comida, su remedio... Y así es en todas partes acá. Lo mismo le pasó a mi yerna, mi vecina... Luego crié otra vez 80 pollitos y de esos ninguno quedó. Murieron todos. Los vecinos se quejan de que se mueren las gallinas. Nosotros pensamos que fue el veneno, porque antes sobrevivían. Antes de la soja andaban bien.

Vecina de Calle 12000, entrevistada el 18 de febrero de 2013.

Ellos tienen la capacidad de fumigar lo de ellos y entonces los bichos vienen todos acá. Antes fumigábamos una vez el poroto y ahora tres veces, pero igual comieron todo los bichos porque hay muchos más.

Vecino del asentamiento San Pedro Poty, entrevista el 16 de febrero de 2013.

Ahora afecta menos a la producción porque llevamos nuestras chacras detrás de la casa. Porque antes teníamos los cultivos delante de la casa y les afectaba más. Antes estaba más cerca la soja de nuestros cultivos, y el matatodo [el glifosato] afectaba a todo. Ya sólo están quedando al frente las casas. Donde yo vivo, en Calle 8.000, sólo una línea de Camerún [un tipo de pasto] han dejado, y eso no ataja nada. Cuando usan ese matatodo seca todo lo que hay por ahí, y por eso nuestra chacra la llevamos al fondo.

Vecino de Cañada Santa Rosa, entrevistado el 19 de febrero de 2013.

Frente a este tipo de daños es muy poco frecuente que se interpongan denuncias, pues las personas no confían en obtener ninguna respuesta por parte de las instituciones. En palabras de uno de los afectados por una de las fincas de DAP, “Nosotros no protestamos porque se protesta de balde. Se denuncia a la Fiscalía de balde. En ninguna parte han denunciado. Sólo se escuchan quejas entre vecinos pero nadie denuncia. Nosotros aguantamos en nuestra casa.”¹⁷⁹

Por otro lado, la contaminación genética también representa una amenaza para la soberanía sobre el germoplasma autóctono. Con la cercanía a una plantación extensiva de soja genéticamente modificada se hace muy difícil producir las propias semillas.

Impactos sobre el empleo

Debido a su alto grado de mecanización en las operaciones de cultivo, la soja genera poco empleo. Se calcula que es suficiente con un trabajador por cada 200 hectáreas de cultivo.¹⁸⁰ La mayor cantidad de trabajo se da durante la etapa de conversión de las fincas ganaderas en plantaciones. DAP al inicio contrató jornaleros para el destroncado de la finca, a los que pagaba 35.000 guaraníes (menos de nueve dólares) al día.¹⁸¹ Después apenas necesitaron mano de obra. Se recurre a trabajo manual en la eliminación de las malas hierbas (conocido como “carpida”), que cada vez se hacen más resistentes al herbicida.

En las comunidades visitadas, vecinas a las plantaciones de DAP, normalmente un número reducido de personas trabajan como contratistas, reuniendo mano de obra para los trabajos de carpida para DAP y para otros empresarios que también se dedican al cultivo de soja. Son cada vez más quienes optan por buscar empleo fuera de la propia finca, como trabajadores

temporales en las plantaciones o estancias ganaderas cercanas. Todas las personas entrevistadas coinciden en que las estancias ganaderas generan más empleo que las plantaciones de soja, pues contratan jornaleros para el cuidado de los pastos y otras actividades relacionadas con el ganado.

Cuadro 9. Algunos testimonios sobre el impacto de DAP en la generación de empleo

DAP sólo ofrece trabajos de carpida [eliminación de malas hierbas]. Pagan por hectárea, de 350.000 [menos de 90 dólares] a 450.000 guaraníes [unos 112 dólares] por hectárea, depende de lo sucio que esté. Con mucho trabajo puedes ganar algo de eso. Lo hacemos tres veces al año, y armamos grupos para ir a ganar esa plata.

Vecino de Calle 10000, entrevistado el 18 de febrero de 2013.

Yo soy “mensualero” [trabajador asalariado que cobra mensualmente], y no llego ni al salario mínimo. Si me quedo en la chacra el problema es cómo vender. La competencia vende en cantidad [el maíz] y así pueden aceptar un precio de 600 guaraníes [unos 15 centavos de dólar] por kilo, pero yo que produzco poco no me sirve. Y acá ningún comprador viene por unos pocos kilos de maíz. Así que nosotros juntamos el maíz en bolsas, nos subimos en colectivo y nos vamos a vender. Vamos con la idea de vender el kilo a 2.000 guaraníes [50 centavos de dólar] y terminamos vendiendo a 1.200 [30 centavos de dólar] ¿Y cómo vamos a volver con nuestro maíz? Terminamos vendiéndolo a cualquier precio.

Vecino de San Pedro Poty, entrevistado el 16 de febrero de 2013.

Teníamos mucho trabajo con los ganaderos para limpieza de pastos. Después la soja nos quitó el trabajo. Ahora nuestros familiares tienen que ir al Chaco a trabajar en ganadería.

Vecina de San Pedro Poty, entrevistada el 16 de febrero de 2013.

Nosotros hicimos estudiar a nuestros hijos con la esperanza de que puedan trabajar con ellos. Yo tengo dos hijos técnico-agropecuarios. No nos dieron beca, lo hicimos por nuestra cuenta por el interés de que trabajasen con ellos. Pero tuvieron que buscar trabajo en otra parte: uno en el Chaco y otro en Asunción.

Vecino de San Pedro Poty, entrevistado el 16 de febrero de 2013.

Medios para la resolución de quejas

La política de DAP para gestionar las quejas de los vecinos se ha basado en los técnicos de la Fundación Moisés Bertoni, quienes buscan resolverlas directamente con los afectados y evitar recurrir al procedimiento formal de reclamos y mucho menos a la vía judicial. En caso de que se produzca una denuncia formal por la aplicación de plaguicidas, la autoridad que interviene es el SENAVE para verificar si se ha producido un daño. Hasta ahora sólo se ha dado un caso, en Calle 10.000, donde una familia denunció que el glifosato había dañado sus plantaciones de sésamo y moringa. En esa ocasión, DAP accedió a un acuerdo de resarcimiento económico a través del SENAVE para compensar las pérdidas, incluso antes de realizar los análisis para demostrar que se debía al glifosato. Éste ha sido el único caso hasta la fecha que se ha resuelto a través de los cauces oficiales. DAP niega haber recibido ninguna queja concreta sobre afecciones a la salud, si bien han recibido quejas por el olor fuerte cuando se fumiga, aunque sin llegar a ninguna denuncia formal. La empresa reconoce que hay necesidad de mejorar en la gestión de las reclamaciones, buscando canales más oficiales y mecanismos que ayuden a formalizarlas y atenderlas adecuadamente.¹⁸²

CONCLUSIONES

El avance de la soja y otros monocultivos para la exportación en Paraguay representa una amenaza para el sector campesino e indígena, al competir por recursos escasos y provocar graves daños sobre el medio ambiente y la salud de las personas que viven junto a las plantaciones. Fondos de inversión transnacionales invierten cada vez más en la compra y explotación de grandes extensiones de tierra, mientras que un pequeño número de empresas multinacionales dominan el suministro de semillas e insumos, la comercialización y cada vez más el resto de eslabones de la cadena de valor.

En este contexto, la empresa Desarrollo Agrícola del Paraguay (DAP) se ha diferenciado del resto del sector de la soja adoptando una política de responsabilidad social y ambiental y esforzándose por mantener prácticas más respetuosas con el entorno de sus plantaciones. Probablemente sea una de las pocas empresas sojeras operando en Paraguay que tiene en cuenta el impacto de su actividad sobre las comunidades vecinas y sobre el medio ambiente, así como su contribución al desarrollo local. DAP ha demostrado un mayor respeto a la normativa ambiental, no adquiere tierras de los pequeños propietarios y ha establecido vías de diálogo y colaboración con las poblaciones vecinas. Sin embargo mantiene el mismo modelo de producción: altamente mecanizado, basado en semillas de soja genéticamente modificadas para resistir aplicaciones masivas de herbicida y muy intensivo en todo tipo de agroquímicos. Un sistema de producción que inevitablemente impacta sobre el medio ambiente, la salud y los medios de vida de las comunidades vecinas a las plantaciones, quienes viven permanentemente expuestas a la aplicación de estos productos. Los testimonios recogidos coinciden en que resulta casi insostenible convivir con el cultivo intensivo de soja por los daños que causa sobre su salud y por la pérdida de cultivos y animales de cría de los que dependen para su subsistencia.

La gravedad de estos impactos demuestra cómo la responsabilidad social empresarial y los esquemas de tipo voluntario tales como la Mesa Redonda de Soja Responsable (a la que DAP está en proceso de afiliarse) resultan insuficientes para garantizar una efectiva protección de la salud y los derechos de las comunidades locales. Incluso en el caso de DAP, una empresa comprometida con apoyar el desarrollo comunitario y abordar el impacto de sus operaciones, las debilidades en la implementación de su política de responsabilidad empresarial han dado lugar a más problemas que beneficios. Por tanto, y dados los límites de la responsabilidad empresarial, para garantizar el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, se requiere una normativa ambiental y laboral más estricta, y sin duda mecanismos más eficaces de fiscalización de su cumplimiento.

Por otro lado, con el fin de lograr una relación positiva en el entorno de sus plantaciones y evitar el conflicto, DAP puso en marcha una estrategia de inversión social, ambiental y productiva a través de organizaciones intermediarias como la Fundación Moisés Bertoni, la Sociedad de Estudios Rurales e IDEA. En algunos casos se trató de acciones asistenciales, con un impacto muy limitado. Y en otras ocasiones se emprendieron iniciativas de desarrollo agrícola y empresarial. Al analizar los resultados de estos proyectos productivos en las comunidades de Colonia Barbero, 12 de Junio y Agüerito cinco años después, se pueden calificar como un fracaso desde el punto de vista de la mejora de la economía familiar. Las familias que esperaban mejorar sus ingresos mediante la adopción de prácticas productivas más “modernas” y tecnificadas renunciaron a su autonomía y asumieron todo el riesgo de la inversión. Como resultado, una buena parte de estas familias cayó en un ciclo de endeudamiento del que aún se esfuerzan por salir y muchas de ellas perdieron sus principales activos. Ni DAP ni las organizaciones que llevaron a cabo estos proyectos tuvieron en cuenta lo suficientemente el contexto y las condiciones socioproductivas locales, por lo que promovieron

un modelo que no era el más adecuado e hicieron recaer prácticamente todo el riesgo de la inversión sobre las familias campesinas.

Los casos estudiados ilustran los problemas que surgen cuando se promueve la transferencia de un determinado modelo de producción sin tener lo suficientemente en cuenta el contexto y la cultura productiva de las familias campesinas y, sobre todo, cuando todo el riesgo recae sobre éstas. El fracaso económico resultado de esta transferencia debería ser compartido por DAP, pues promovió un modelo que no era el apropiado, tal y como la propia empresa reconoce al plantearse ahora un modelo distinto, basado en la producción orgánica.

Los resultados de esta investigación ponen en cuestión la calificación de las prácticas empresariales de DAP como responsables y sostenibles. Las acciones y esfuerzos positivos emprendidos por esta empresa no compensan los problemas generados por un modelo de negocio que tiende a profundizar la concentración de la riqueza y la tierra, contamina el entorno, daña la salud de las personas, compite por recursos limitados y pone en riesgo los medios de vida tradicionales de las comunidades campesinas e indígenas. Si esto es así en el caso de DAP, cabe esperar impactos mucho más dañinos en el resto del sector, dado que la mayoría de las empresas sojeras ni siquiera tienen en cuenta su impacto sobre el entorno en el que operan.

Por otro lado, las organizaciones de cooperación y los organismos financieros internacionales que han apoyado las actividades de DAP en Paraguay deberían evaluar sus resultados y en qué medida contribuyen con su mandato institucional. Y no puede ignorarse tampoco la responsabilidad de las instituciones nacionales en la promoción de un modelo cuyos riesgos y eficacia en términos de desarrollo económico no han sido lo suficientemente contrastados.

BIBLIOGRAFÍA

- Antoniou, M. et al. (2010). "Soja transgénica: ¿Sostenible? ¿Responsable?". GLS Bank y ARGE.
- ASEED Europe, Base Investigaciones Sociales, Corporate Europe Observatory, Grupo de Reflexión Rural y Rainforest Action Network (2008), "The Round Table on IR-Responsible Soy: Certifying Soy Expansion, GM Soy and Agrofuels. A briefing on the impacts of the Round Table on Responsible Soy".
- Atance, Cristhian. "RSE en Paraguay Otro eslabón en la cadena". Buenos Aires, 2011.
- Banco Mundial (2010). "Paraguay: Estudio de Pobreza. Determinantes y desafíos para la reducción de la pobreza". Diciembre de 2010. Asunción.
- BASE Investigaciones Sociales (2007). "Los refugiados del modelo agroexportador", en *Repúblicas Unidas de la Soja: Realidades sobre la producción de soja en América del Sur*. Coordinadora: Gabriela Rulli.
- Benítez-Leite, Stella, María Luisa Macchi y Matilde Acosta (2009). "Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos". En *Archivos de Pediatría del Uruguay 2009*, 80(3).
- Castillo, Marcos (2009). "Análisis del censo nacional agropecuario". Asunción.
- Coalición Holandesa de la Soya (2011). "Otra mirada sobre la soja: El lado oscuro del grano milagroso". AID Environment y miembros de la Coalición Holandesa de la Soya, febrero de 2006, versión revisada 2011.
- Comisión de la Verdad y Justicia (2008). Informe final. Tomo IV.
- Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2007). "Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005)". Coordinador: Hugo Valiente. Asunción.
- Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). "Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción.
- Corporate Europe Observatory (2009). "'Soja Responsable' en Paraguay: el grupo DAP y el avance del monocultivo de soja en San Pedro."
- De Ferranti, D., G. E. Perry, W. Foster, D. Lederman y A. Valdés. (2005) *Beyond the City: The Rural Contribution to Development*. Washington, DC. The World Bank.
- De Lapérouse, Philippe (2012). "Case Studies on Private Investment in Farmland and Agricultural Infrastructure". High Quest Partners. Enero de 2012.
- Doughman, Richard (2011). "La Chipa y la Soja: La pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este Paraguayo". BASE Investigaciones Sociales. Asunción, noviembre 2011.
- Doughman, Richard (2012). "La soberanía alimentaria en el Paraguay". BASE Investigaciones Sociales. Asunción, julio 2012.
- Educación para la Acción Crítica (EdPAC), Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y Grupo de Investigación en Derechos Humanos y

- Sostenibilidad (2010). "Situación de los derechos humanos en el Oriente Paraguayo en 2009". Informe de la misión de observación a Paraguay. Barcelona, diciembre de 2010.
- FAO (2011). "Concentración y extranjerización de la tierra en América Latina".
- FAO (2012). "Panorama de la Seguridad Alimentaria Nacional en América Latina y el Caribe 2012".
- Fogel, Ramón (2012). "Cambio climático, alteraciones ambientales y pobreza en el Paraguay". CLACSO, 2012.
- Galeano, Luis (2011). "El caso de Paraguay", capítulo en *Concentración y Extranjerización de la Tierra en América Latina*. FAO, 2011.
- GM Watch, Friends of the Earth y Corporate Europe Observatory (2011). "Certified responsable? Critical assessment of the Round Table on Responsible Soy". Marzo de 2011.
- Glauser, Marcos (2009). "Extranjerización del territorio paraguayo" BASE Investigaciones Sociales. Asunción, Paraguay.
- Guereña, Arantxa (2011). "Derecho a producir: Invertir más y mejor en la pequeña agricultura de América del Sur". Informe de Investigación de Oxfam. Octubre de 2011.
- Heinemann, Jack A. (2009) "Hope Not Hype". Penang: Third World Network.
- International Land Coalition (2011). "The concentration of land ownership in America Latina. Approach to current problems".
- Itriago, Déborah (2012a). "Tributación en Paraguay: el ostracismo de la pequeña agricultura". Informe de Investigación de Oxfam. Mayo de 2012.
- Itriago, Déborah (2012b). "Justicia tributaria para la población campesina paraguaya". Documento de debate de Oxfam. Mayo de 2012.
- Macro International (2011). "Child Labor in the Sugarcane Industry in Paraguay". Informe para USDOL. Diciembre de 2011.
- Maiztegui (2009). "Una nueva modalidad asociativa en Argentina: el pool de siembra" Estudios Agrarios de la Procuraduría Agraria.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011), "Producción Agropecuaria: síntesis estadísticas. Zafra Agrícola 2010/2011". Informe final, diciembre 2011. Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias.
- Moliner, Lila (n.d.). "Un proyecto de desarrollo económico alternativo". Asunción, CIDE.
- Morley, Samuel y Vos, Rob. (2000) "Pobreza y crecimiento dual en Paraguay", en Revista Paraguaya de Sociología N° 107, Año 37 (CPES, Asunción, enero/abril de 2000).
- Oxfam (2012a). "El lado oscuro del comercio mundial de cereales". Informe de investigación de Oxfam. Agosto de 2012.
- Oxfam (2012b). "Inversión privada en agricultura: por qué es fundamental y qué se necesita". Erinch Sahan y Monique Mikhail. Documento de trabajo de Oxfam. 25 de Septiembre de 2012.
- Palau, Tomás (2012). "Es lógico que una sociedad agredida se defienda". Recopilación de artículos 2008-2011. BASE Investigaciones Sociales. Asunción, junio 2012.

Palau, Tomás, Guillermo Ortega, Luir Rojas, Milena Pereira y Richard Doughman (2012). "Los impactos socioambientales de la soja en Paraguay". BASE Investigaciones Sociales. Asunción, Paraguay. Julio, 2012.

Pereira, Milena (2011). "El Estado y la garantía del derecho a la alimentación adecuada en Paraguay". BASE Investigaciones Sociales. Asunción, diciembre 2011.

Pesticide Action Network (2009). "Lista de plaguicidas altamente peligrosos".

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). "Sector rural paraguayo: una visión general para un diálogo informado". Cuadernos de Desarrollo Humano, no. 7, número especial. Asunción, diciembre 2010

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). "Informe Nacional sobre Desarrollo Humano: Colombia".

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). "Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso". Nueva York.

Ramírez, Julio (2010). "Análisis de la inversión agropecuaria en Paraguay". Informe interno para Oxfam.

Riquelme, Quintín (2003). "Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino". CLACSO, Argentina. Septiembre de 2003.

Riquelme, Quintín y Elsy Vera (2013). 'La otra cara de la soja: El impacto del agronegocio en la agricultura familiar y la producción de alimentos'. Proyecto acción ciudadana contra el hambre y por el derecho a la alimentación. Asunción, julio de 2013.

Rodríguez, José Carlos (2012). "¿Cómo se le roba a la nación? Los mecanismos de evasión y elusión fiscal más empleados". CDE, Decidamos, Oxfam. Asunción, febrero de 2012.

Rojas, Luis (2009). "Actores del agronegocio en Paraguay". BASE Investigaciones Sociales. Asunción, Paraguay.

SIPAE (2011). "Atlas sobre la concentración de la tierra en el Ecuador"

Thundiyil, Joseph G, Judy Stober, Nida Besbelli y Jenny Pronczuk (2008). "Intoxicación aguda por plaguicidas: propuesta de instrumento de clasificación". Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Volumen 86. Marzo 2008. 161-240.

US Department of Labor's Bureau of International Affairs (2012). "List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor". Office of Child Labor, Forced Labor and Human Traffic.

Verdecchia, Miguel Angel (2007). "La modernización agraria en Paraguay". Ponencia presentada en el marco de un seminario sobre desarrollo organizado por el Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS). Asunción, octubre de 2007.

Verdecchia, José Miguel A. (2011). "Políticas del mercado de trabajo y pobreza rural en Paraguay", Informe de consultoría para FAO-OIT-CEPAL. Asunción, agosto de 2011.

World Health Organization (2010). "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification. 2009". International Programme on Chemical Safety.

WWF (2010). "Certification and roundtables: do they work? WWF review of multi-stakeholder sustainability initiatives".

Zwart, Gine (2011). "Company commitment instruments to safeguard the food/land rights of people confronted with land use shifts". Policy Brief. Oxfam Novib, marzo de 2011.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADEC	Asociación de Empresarios Cristianos
ARP	Asociación Rural del Paraguay
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAPECO	Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
CEO	Corporate Europe Observatory
CFI	Corporación Financiera Internacional
CODEHUPY	Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
CONAMURI	Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
DAP	Desarrollo Agrícola del Paraguay
FMB	Fundación Moisés Bertoni
FNC	Federación Nacional Campesina
FUNDECA	Fundación Desarrollo Campesino
IAP	Intoxicación Aguda por Plaguicidas
IBR	Instituto de Bienestar Rural
IDEA	Instituto de Derecho y Economía Ambiental
IIRSA	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
IMO	Institute for Marketecology
INDERT	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
IPTA	Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
RTRS	Mesa Redonda de Soja Responsable
SEAM	Secretaría del Ambiente
SENAVE	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
SER	Sociedad de Estudios Rurales
TRG	The Rohatyn Group
USAID	Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional
WWF	World Wildlife Fund

Equivalencia de moneda: Al momento de realizar este estudio un dólar se corresponde aproximadamente con 4.000 guaraníes.

AGRADECIMIENTOS

La autora desea agradecer a Quintín Riquelme por haber aportado su amplia experiencia y conocimiento como parte del equipo investigador, y a César Molinas por todo el apoyo en la fase de terreno especialmente con la traducción al guaraní; sin ellos no habría sido posible realizar este estudio. A Stephanie Burgos por su valiosa orientación durante todo el proceso de investigación y redacción del informe. A Oscar López por sus sugerencias y por el apoyo de la oficina de Oxfam en Paraguay. Y a Gabriela Alcaraz, Teresa Cavero, Emmanuel Tumusiime, Suzanne Zweben y Duncan Pruett por sus comentarios al documento. Oxfam también agradece a Alberto Guijarro las observaciones al texto, y a todas las personas que cedieron su tiempo y compartieron sus experiencias con el equipo de investigación.

NOTAS

- 1 Oxfam, 2012b.
- 2 Para más información sobre la campaña CRECE, ver <http://www.oxfam.org/es/crece/que-es-crece/>
- 3 De Lapérouse, 2012.
- 4 El 38% de la población vive en áreas rurales, según datos para 2011 en la base de datos del Banco Mundial, <http://data.worldbank.org>
- 5 Ramírez, 2010.
- 6 Sólo por detrás de Singapur y Qatar. Fuente: Base de datos del Banco Mundial, <http://data.worldbank.org>
- 7 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013.
- 8 Dato correspondiente a 2011, según la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, disponible en <http://datos.bancomundial.org/indicador>
- 9 La Encuesta de Hogares se basa en el método del umbral de la pobreza. Ésta se define como el nivel de ingresos equivalente al coste de una canasta básica de consumo, que comprende los alimentos básicos cuyo contenido calórico y proteico satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos además de otros bienes y servicios esenciales como vivienda, vestido y educación (en 2011 el umbral de la pobreza nacional promedio se situaba en 438.954 guaraníes mensuales, unos 110 dólares). El umbral de la pobreza extrema considera exclusivamente el coste de la canasta básica de alimentos. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay, 2011.
- 10 Morley y Vos (2000).
- 11 Banco Mundial, 2010. Si bien existe un debate en torno a la extensión de tierra mínima para participar en la agricultura comercial, dependiendo de los rubros, la calidad del suelo y las condiciones de trabajo,, en el caso de la soja y otros cultivos comerciales e intensivos en capital se requieren superficies muy superiores a las 30 hectáreas.
- 12 De acuerdo con el Estatuto Agrario de Paraguay, la unidad básica de economía familiar es aquella propiedad cuyo aprovechamiento eficiente permite a una familia campesina obtener niveles de ingreso suficientes para su arraigo y satisfacción de necesidades básicas, estableciéndose diez hectáreas como el mínimo asignado a beneficiarios de asentamientos de colonización.
- 13 Las tierras fiscales son tierras pertenecientes al Estado y cuyo fin es la reforma agraria. Sin embargo, gran parte de estas tierras fue cedida o vendida a precios ínfimos a personas cercanas al régimen dictatorial stronista. Para más información ver Riquelme 2003. .
- 14 No se trata de cooperativas campesinas, sino de cooperativas multi-actores. PNUD, 2010.
- 15 El índice de Gini expresa la desigualdad en el reparto de la tierra, donde 1 representa la máxima inequidad y 0 la máxima equidad.
- 16 Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Censo Agropecuario Nacional 2008.
- 17 Según el censo agropecuario nacional de 2008, el 60% de las fincas de hasta 50 hectáreas no cuenta con títulos de propiedad (la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur define para Paraguay la Agricultura Familiar hasta 50 hectáreas). Esta proporción se eleva a 67,8% en las fincas inferiores a 20 hectáreas.
- 18 Entrevista a Julio Brun, Gerente de Planificación del INDERT, 12 de febrero de 2013.
- 19 Riquelme, 2003.
- 20 Ibid.
- 21 Comisión de Verdad y Justicia, 2008.
- 22 El Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), creado en el 2007, considera agricultores familiares a productores cuya principal fuente de ingreso familiar es la agricultura, con lotes de hasta 20 ha en la Región Oriental y hasta 50 ha en la Occidental. Ver PNUD, 2010.
- 23 Cálculo basado en datos del Censo Agropecuario de 2008.
- 24 PNUD, 2010.
- 25 Las “derecheras” son los derechos de posesión de los beneficiarios de la reforma agraria cuando aún no disponen de título de su propiedad. La ley prohíbe vender estos derechos a terceros.
- 26 Entrevista a Julio Brun, Gerente de Planificación del INDERT, 12 de febrero de 2013.
- 27 Ley 4682 de 7 de agosto de 2012.
- 28 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2007.
- 29 Información sobre el asesinato de Lezcano en “Aseguran que se está investigando asesinato de líder campesino”, abc Color, 1 de marzo de 2013. Para más información ver CODÉHUPY, 2007.
- 30 Estos hechos aún no han sido esclarecidos, y el Gobierno de facto que sucedió al de Lugo desactivó la comisión de investigación independiente que contaba con la asistencia de la Organización de Estados Americanos, quedando en manos de la Policía Nacional y el Ministerio Público de Paraguay.

- Para más información sobre estos hechos ver Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012.
- 31 Ver sección más adelante sobre Transgénicos, agroquímicos e impactos sobre la salud.
 - 32 De acuerdo con datos del censo nacional agropecuario de 2008, las explotaciones menores de 50 hectáreas continúan produciendo más del 90% de los alimentos (mandioca, batata, poroto, hortalizas, piña y banana) destinados no sólo al consumo de las propias familias campesinas sino también al conjunto de la población nacional a través del mercado interno. Galeano, 2011.
 - 33 Riquelme, 2013.
 - 34 Guereña, 2011.
 - 35 de Ferranti et al, 2005.
 - 36 Entrevista a Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, el 13 de febrero de 2013.
 - 37 El proyecto de ley que pretende gravar con un 10% las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo ha sido rechazado por la Cámara de los diputados de Paraguay en abril de 2013, tras una fuerte presión de los gremios sojeros. El proyecto había sido aprobado por el Senado en diciembre del año anterior, adonde regresa tras su rechazo por los diputados. Más información en “Sojeros hacen rechazar impuesto a la exportación e imponen un ‘proyecto alternativo’”, en E’a, 10 de abril de 2013.
 - 38 Rodríguez, 2012.
 - 39 Itriago, 2012a.
 - 40 La Comisión Europea en su documento de Estrategia de Paraguay 2007-2013 reconoce “la debilidad institucional en materia medioambiental”.
 - 41 Entrevista a Luis Rojas, investigador de Base IS, el 11 de febrero de 2013.
 - 42 Entrevista a Luis Rojas, investigador de Base IS, el 11 de febrero de 2013.
 - 43 Ley 2748/05 de Fomento de los agrocombustibles y Reglamento del 27 de abril de 2006.
 - 44 Itriago, 2012a.
 - 45 PNUD, 2010.
 - 46 Riquelme, 2013.
 - 47 Marcial Gómez, Secretario General Adjunto de la Federación Nacional Campesina. Entrevista el 13 de febrero de 2013.
 - 48 Alicia Amarilla, Secretaria de Relación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Entrevista el 12 de febrero de 2013.
 - 49 La proporción de propietarios extranjeros en el caso de explotaciones de más de mil hectáreas pasó del 14% en 1991 al 24% en 2008, según el censo agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
 - 50 Galeano, 2011.
 - 51 Glauser, 2009.
 - 52 Entrevista a Julio Brun, Gerente de Planificación del INDERT, el 12 de febrero de 2013.
 - 53 Según un diario que afirma que los uruguayos ya han adquirido aproximadamente un millón de hectáreas, a quienes se suman estadounidenses y europeos “Ganadería guaraní sigue captando más inversiones” en El País portal digital, 14 de enero de 2013.
 - 54 Los distritos estudiados fueron: Guayaibí, Capiibary, Caaguazú, Repatriación, San Juan Nepomuceno, Tavaí, Caapucú, San R.G. de Santa Cruz, Minga Porá y Naranjal. Riquelme, 2013.
 - 55 Estadísticas de la FAO en FAOSTAT: <http://faostat3.fao.org/>
 - 56 Riquelme, 2013.
 - 57 Coalición Holandesa de la Soja, 2011.
 - 58 Ibid.
 - 59 El Compromiso europeo de tarifa cero para oleaginosas excluyó a la soja y otras oleaginosas del pago de aranceles, a diferencia de otros productos como el azúcar. Posteriormente, el Acuerdo Blair House fijó una restricción a la producción europea de oleaginosas, limitando la producción subsidiada y estableciendo un techo al volumen total producido, muy inferior al consumo europeo. Ambos acuerdos influyeron en los precios y aumentaron la dependencia de la importación de grasas y proteínas vegetales, que cada vez provienen más de América del Sur y menos de Estados Unidos. Para más información ver Coalición Holandesa de la Soja, 2011.
 - 60 Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Agropecuario Nacional 2008.
 - 61 La soja forma parte de un sistema de rotación de cultivos en el que se incluyen también maíz y girasol y en algunos casos trigo.
 - 62 Basado en datos del Censo Agropecuario Nacional 2008.
 - 63 Con datos de FAOSTAT correspondientes a 2011.
 - 64 Dato correspondiente a 2011 obtenido de la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, disponible en <http://data.worldbank.org/indicador/SL.AGR.EMPL.ZS>

- 65 En los últimos cinco años el valor de las exportaciones de soja fue en promedio de 1.548 millones de dólares según datos de UN Comtrade (<http://comtrade.un.org>). Esto representa un 8,7% del PIB nacional promedio en esos años, que fue de 17.838 millones de dólares según la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial (<http://databank.worldbank.org>).
- 66 Sitio web de CAPECO: <http://www.capeco.org.py/>
- 67 En 2010 el valor de las exportaciones de soja ascendió a casi 1.500 millones de dólares según datos de FAOSTAT disponibles en <http://faostat3.fao.org/home/index.html>
- 68 Según cálculos de Oxfam, entre 2005 y 2009 el presupuesto público orientado a la agricultura familiar campesina fue en promedio de 118 millones de dólares, con una ejecución presupuestaria del 66,3%. Esto equivale a un gasto promedio anual de 74,3 millones de dólares. Ver Itriago, 2012b,
- 69 Según estimaciones de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay. <http://aps.org.py>
- 70 Entrevista al Viceministro de Agricultura y Ganadería, Nicanor Invernizzi, 11 de febrero de 2013.
- 71 Riquelme, 2013.
- 72 Los costes de producción además son menores en Paraguay que en otros países pues ascienden a de 398,7 \$/ha respecto a 597,8 \$ en Estados Unidos o 464,2 \$ en Brasil. Ver de Lapérousse, 2012.
- 73 Entrevista a Luis Rojas, investigador de Base IS, 11 de febrero de 2013.
- 74 Estimación provisional de CAPECO.
- 75 Ver “Soja: Confirman que Paraguay logró una cosecha récord de 9,3 M de toneladas”. Noticia de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores y Exportadores de Cereales de Paraguay, en <http://www.acopiadores.com/noticias/soja-confirman-que-paraguay-logro-una-cosecha-record-de-93-m-de-toneladas-11043>
- 76 Según datos de CAPECO, disponibles en su sitio web: <http://www.capeco.org.py/>
- 77 Disponibles en su sitio web: <http://www.capeco.org.py/>
- 78 Entrevista a Edgar Restrepo, Oficial Principal de Inversión de la Corporación Financiera Internacional, el 22 de febrero de 2013.
- 79 Entrevista a Nicanor Invernizzi, Viceministro de Agricultura y Ganadería, 11 de febrero de 2013.
- 80 Censo Agropecuario Nacional de 2008.
- 81 Un diagnóstico realizado en 2008 y 2009 en el departamento de Canindeyú reveló que en el distrito de Nueva Esperanza el 58% de los propietarios eran brasileños, en Katueté el 83% y en Francisco Caballero Añvarez el 42%. Palau et al., 2012.
- 82 Rojas, 2009.
- 83 BASE investigaciones Sociales, 2007.
- 84 La cadena de valor es un concepto desarrollado por Michael Porter en Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985) que consiste en describir el conjunto de actividades que lleva a cabo una empresa y que generan valor al cliente final, que van desde la investigación y el desarrollo hasta los servicios de post-venta.
- 85 Entrevista a Luis Rojas, investigador de Base IS, el 11 de febrero de 2013.
- 86 Palau et al., 2012.
- 87 Entrevista a Luis Rojas, 11 de febrero de 2013.
- 88 Para ampliar información ver Oxfam, 2012a.
- 89 Heinemann, 2009.
- 90 Hasta 2004 no se firmó el Acuerdo Marco sobre Incorporación de Biotecnología Agrícola, que permitió el uso comercial de las primeras semillas de soja transgénica. Ver Educación para la Acción Crítica et al, 2010.
- 91 Monsanto percibe 4,4 dólares por cada tonelada de soja producida en Paraguay, en base a un acuerdo firmado con los gremios de agricultores en 2004 por el uso de la soja RR, cuya patente vence en enero de 2014. Para más información ver “Productores de soja accionan para cesar millonario pago a Monsanto” en abc Color, 6 de febrero de 2013 y “Monsanto dejará de cobrar regalías por soja RR en Paraguay desde enero del 2014” en Reuters Argentina, 27 de marzo de 2013.
- 92 Entrevista a Víctor Benítez, director de Alter Vida, 11 de febrero de 2013.
- 93 Palau et al, 2012.
- 94 Ver lista de plaguicidas con solicitudes de prohibición y severa restricción en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. <http://www.olca.cl/oca/plaguicidas/plaq04.htm>
- 95 Pesticide Action Network, 2009
- 96 Ver World Health Organization, 2010.
- 97 Ver, entre otros, el estudio realizado por la Cátedra de Pediatría, el Centro Materno Infantil y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Asunción que demuestra la relación entre la exposición a plaguicidas y la frecuencia de malformaciones congénitas. Benítez et al., 2009.

- 98 Entrevista a Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de CONAMURI. 12 de febrero de 2013. En el transcurso de la investigación no se tuvo acceso al informe de este trabajo, por lo que no fue posible evaluar la metodología aplicada.
- 99 Resultados de dos años de investigaciones, pendientes de publicar por la Facultad de Medicina. Entrevista a Marcial Gómez, Secretario General Adjunto de la FNC. 13 de febrero de 2013.
- 100 “Los niños del sojal: más de 260 escuelas se hunden en un mar de soja”, en E’a, 7 de diciembre de 2010.
- 101 39º período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ginebra, 5 a 23 de noviembre de 2007.
- 102 EdPAC et al, 2010.
- 103 Por ejemplo, CONAMURI presentó 23 denuncias en el municipio de Repatriación que no fueron tramitadas por el intendente municipal a la SEAM. Entrevista a Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de CONAMURI, 12 de febrero de 2013.
- 104 Entrevista a Mariana López, directora de Gestión Ambiental, Secretaría del Ambiente. Entrevista el 13 de febrero de 2013.
- 105 Por ejemplo, en el departamento de Guairá tres campesinos fueron condenados a tres años de cárcel por oponerse a la fumigación de la soja. Entrevista a Marcial Gómez, Secretario General Adjunto de la FNC, 13 de febrero de 2013.
- 106 Entrevista a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. 12 de febrero de 2013.
- 107 Palau et al., 2012.
- 108 Entrevista a Marcial Gómez, Secretario General Adjunto de la FNC, 13 de febrero de 2013.
- 109 Thundiyl et al, 2007.
- 110 Palau et al., 2012.
- 111 Educación para la Acción Crítica et al., 2010.
- 112 Ver, a modo de ejemplo, la inacción del Estado ante el caso de la comunidad indígena de Campo Agua’ê descrito en Palau et al., 2012.
- 113 Entrevista a Heriberto Osnaghi, Director General de la Secretaría del Ambiente. 13 de febrero de 2013.
- 114 Entrevista a Christian Marcos, Director de Agroquímicos. SENAVE. 13 de febrero de 2013.
- 115 Ver, entre otros, BASE IS, 2007; Doughman, 2011; Palau et al, 2012; Pereira et al., 2012
- 116 Sitio web de la RTRS: <http://www.responsiblesoy.org/>
- 117 GM Watch, Friends of the Earth y Corporate Europe Observatory, 2011.
- 118 Para un análisis crítico de los criterios consultar GM Watch, Friends of the Earth y Corporate Europe Observatory, 2011.
- 119 Zwart, 2011.
- 120 Ver, por ejemplo, la carta abierta “Responsible soy process must be abandoned” firmada por GM Watch y otras organizaciones en abril de 2009; el artículo “‘Responsible soy’ nominated for Belgian Greenwash award” de CEO, 27 de junio de 2012, ASEED et al., 2008 o GM Freeze et al. (n.d.).
- 121 WWF, 2010.
- 122 <http://www.responsiblesoy.org/>
- 123 http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
- 124 Ver, entre otros, Zwart 2011.
- 125 Atance, 2011.
- 126 ADEC fue fundada en 1981 y actualmente agrupa a unos 200 empresarios de diferentes sectores. Su misión consiste en promover la RSE a través de la formación, la financiación de proyectos comunitarios y la concesión de premios. Entre 2006 y 2009 llevó a cabo el Programa “Incorporando Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en Pymes”, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID. Ver más información en <http://www.adec.org.py/>
- 127 Entrevista a Luis Rojas, investigador de Base IS, 11 de febrero de 2013.
- 128 Ver sitio web de NF Developers: <http://www.nfdevelopers.com/>
- 129 Frontera Agrícola del Paraguay ha sido posteriormente fusionada con DAP, según comunicación personal de Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP del 6 de junio de 2013.
- 130 Información sobre el capital de inversión de la empresa extraída del documento de proyecto de la Corporación Financiera Internacional, disponible en http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27644
- 131 Documentos de proyectos disponibles en el sitio web de la CFI: <http://www.ifc.org> y entrevista a Edgar Restrepo, Oficial Principal de Inversión de la Corporación Financiera Internacional, el 22 de febrero de 2013.
- 132 Entrevista a Edgar Restrepo, Oficial Principal de Inversión de la Corporación Financiera Internacional, el 22 de febrero de 2013.

- 133 DAP Environmental and Social Action Plan, 11 de noviembre de 2011. Disponible en [http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/9A9AEF9D74941558852576BA000E2DA2/\\$File/ESAP%20Final%20-%2019MAY2009.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/9A9AEF9D74941558852576BA000E2DA2/$File/ESAP%20Final%20-%2019MAY2009.pdf)
- 134 De Lap erouse, 2012.
- 135 Seg n datos en el documento de proyecto de la Corporaci n Financiera Internacional, disponible en <http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/ESRS31308>
- 136 En el departamento de Amambay DAP ten a en explotaci n la finca La Esperanza, de casi 8.000 hect reas, pero  sta fue vendida hace unos dos a os. De acuerdo con algunos informantes, estar a actualmente tratando de comprar en la zona de Resqu n entre 5.000 y 7.000 hect reas para cultivar ca a de az car. Seg n la empresa, el objetivo actual de DAP, adem s de la expansi n geogr fica, es la diversificaci n y lograr una mayor integraci n vertical, desarrollando su propia infraestructura para el procesamiento y el transporte, incluyendo puertos. Entrevista a Roberto Codas, accionista, y Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP. 22 de febrero de 2013.
- 137 Ministerio de Agricultura y Ganader a, 2011.
- 138 Fogel, 2012.
- 139 Un pool de siembra es una forma asociativa de producci n a gran escala que surgi  en Argentina para producir soja. Consiste en megacontratos o conjuntos de contratos donde participan propietarios de la tierra, contratistas que aportan maquinaria y llevan a cabo la producci n, ingenieros agr nomos que dirigen t cnicamente el proceso e inversores que aportan el capital, frecuentemente a trav s de un fideicomiso. No existe una figura jur dica espec fica para este tipo de asociaci n ni una legislaci n que la regule. Para ampliar informaci n ver Maiztegui, 2009.
- 140 M s informaci n en <http://www.imo.ch>
- 141 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP, el 22 de febrero de 2013.
- 142 Ver sitio web de DAP: www.dap.com.py
- 143 De Lap erouse, 2012.
- 144 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP. 22 de febrero de 2013.
- 145 Por ejemplo, recientemente se manifestaron unos mil pobladores de la colonia Primavera en el departamento de San Pedro para exigir la expropiaci n de una finca de mil hect reas propiedad de Mauro Gonz lez, titular de la Asociaci n Rural del Paraguay. "Campesinos cierran Ruta III para pedir la expropiaci n de una estancia", en abc Color, 30 de enero de 2013.
- 146 Entrevista a Daniel Campos, director de la Sociedad de Estudios Rurales (SER) el 11 de febrero de 2013.
- 147 Poblador de Ca ada Santa Rosa, entrevistado el 18 de febrero de 2013.
- 148 Pobladora de Calle 12000, entrevistada el 18 de febrero de 2013.
- 149 Entrevista a Roberto Codas y Guillermo Terol, DAP. 22 de febrero de 2013.
- 150 Poblador de Calle 10000, entrevistado el 18 de febrero de 2013.
- 151 Entrevistas a familias de Colonia Barbero, el 15 de febrero de 2013.
- 152 La financiaci n de USAID se enmarc  dentro del proyecto "Alianza San Pedro Sostenible" y cubr a la asistencia t cnica de la Fundaci n Mois s Bertoni para la diversificaci n de rubros productivos y el desarrollo de cadenas de valor. El apoyo financiero de DAP consisti  en el adelanto de la mecanizaci n y los insumos, que posteriormente se descontar a de los rendimientos obtenidos. Entrevista a Rose T. Rakas, Representante de USAID en Paraguay, 12 de marzo de 2013.
- 153 El compromiso de devoluci n no se formalizaba mediante ning n tipo de documento legal entre los productores y la empresa. Seg n  sta, se trabaj  a cr dito y no mediante donaci n con una finalidad educativa. Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP 24 de mayo de 2013.
- 154 Basado en entrevistas a pobladores de Colonia Barbero. 15 de febrero de 2013.
- 155 Campesino de Colonia Barbero, participante en un grupo focal el 15 de febrero de 2013.
- 156 Visi n Banco es el sexto banco en tama o de Paraguay y ofrece cr ditos y servicios en la industria de las microfinanzas y el segmento de financiamiento de consumo en los sectores de medianos y bajos ingresos.
- 157 Entrevista a Guillermo Terol y Roberto Codas, DAP. 22 de febrero de 2013.
- 158 Inforcom es un registro nacional de morosos, que incapacita para recibir m s cr ditos del sistema bancario.
- 159 Mujer entrevistada en el asentamiento San Pedro Poty. 16 de febrero de 2013.
- 160 El Cr dito Agr cola de Habilitaci n fue creado en 1943 como una divisi n especializada del Banco Agr cola del Paraguay y actualmente es una entidad aut noma. Est  exclusivamente dirigido hacia los peque os productores rurales de bajos ingresos y financia inversiones productivas a peque a escala en los sectores agropecuario e industrial. M s informaci n en <http://www.cah.gov.py>
- 161 DAP colabora con el pago de los intereses de la deuda, pero el comit  le ha solicitado que asuma la totalidad y ellos se lo devolver n m s adelante. Seg n entrevista a vecinos de 12 de Junio el 16 de febrero de 2013.
- 162 En entrevista a un productor de soja del asentamiento 12 de Junio, el 16 de febrero de 2013. Seg n declara la empresa, este productor solicit  permiso para utilizar estos productos por la dificultad de

controlar manualmente las malas hierbas en toda su parcela de cultivo y consecuentemente fue dado de baja en el sistema de producción orgánica. Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP, 24 de mayo de 2013.

- 163 La Liga Nacional de Carperos es un movimiento nacional de campesinos sin tierra que ha protagonizado numerosas ocupaciones de latifundios. Entrevista a uno de los dirigentes campesinos de Agüerito el 17 de febrero de 2013.
- 164 Ecotrading Yba Py SA está constituido por fundaciones como SER y FUNDASOL y ONG para la comercialización de sésamo, mandioca (en alianza con los menonitas de CODISA), maíz, poroto, cedrón, frijol y soja, además de otras plantas medicinales y hortalizas (principalmente orgánicos, con o sin certificación) hacia los mercados nacional y de exportación.
<http://www.ecotradingyvapy.com/laempresa.html>
- 165 Entrevista a productores de 12 de Junio que gestionaron el proyecto. 17 de febrero de 2013.
- 166 Basado en entrevistas a dirigentes comunales en Agüerito el 17 de febrero de 2013.
- 167 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP, 22 de febrero de 2013.
- 168 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP, 22 de febrero de 2013.
- 169 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP. 22 de febrero de 2013.
- 170 Vecina de Calle 12.000, entrevistada el 18 de febrero de 2013.
- 171 Vecino de Cañada Santa Rosa, entrevistado el 19 de febrero de 2013.
- 172 En Colonia Barbero se está conformando una organización para demandar a la empresa que solucione este problema.
- 173 Entrevista al coordinador del Hospital Distrital de San Estanislao, 19 de febrero de 2013.
- 174 Profesional sanitario entrevistado el 16 de febrero de 2013.
- 175 Vecino de la comunidad 4000 Fondo, trabajador ocasional en la finca Ybycai.
- 176 Vecino de Calle 12.000, entrevista el 18 de febrero de 2013.
- 177 Entrevista a CODEHUPY, 12 de febrero de 2013.
- 178 Entrevista a Guillermo Terol, gerente socio-ambiental de DAP, 24 de mayo de 2013.
- 179 Vecino de Calle 12000, entrevista el 18 de febrero de 2013.
- 180 Según el informe de Coalición Holandesa de la Soya, 2011.
- 181 Entrevista a pobladores de Colonia Barbero, el 15 de febrero de 2013.
- 182 Entrevista a Roberto Codas y Guillermo Terol. DAP. 22 de febrero de 2013.

Informes de Investigación de Oxfam

Los Informes de Investigación de Oxfam se elaboran para compartir los resultados de las investigaciones, contribuir al debate público y suscitar intercambios de ideas sobre políticas y prácticas humanitarias y de desarrollo. No reflejan necesariamente la postura política de Oxfam. Las opiniones expresadas son las de los autores y no necesariamente las de Oxfam.

Para más información o realizar comentarios sobre este informe, póngase en contacto con advocacy@oxfam.org

© Oxfam Internacional agosto de 2013

Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con policyandpractice@oxfam.org.uk.

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con ISBN 978-1-78077-393-3 en agosto 2013.
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido.

OXFAM

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en 94 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza:

Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam-en-Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japón (www.oxfam.jp)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)

Para más información, escriba a cualquiera de las organizaciones o visite la página www.oxfam.org.